


Boletín **Oficial**
de las
Cortes de Castilla y León
VIII LEGISLATURA

Núm. 229

2 de mayo de 2013

SUMARIO. Pág. 30582

SUMARIO

Páginas

1. PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS

110. Proyectos de Ley

PL/000017-01

Proyecto de Ley de ordenación, servicios y gobierno del territorio de la Comunidad de Castilla y León.

Apertura del plazo de presentación de enmiendas hasta las 14:00 horas del día 27 de mayo de 2013.

30585

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

450. Interpelaciones

I/000131-01

Interpelación formulada a la Junta de Castilla y León por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a política general en materia telecomunicaciones.

30630

I/000132-01

Interpelación formulada a la Junta de Castilla y León por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a política general en materia de calidad y sostenibilidad ambiental.

30631

I/000133-01

Interpelación formulada a la Junta de Castilla y León por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a política general en materia de juventud.

30632

I/000134-01

Interpelación formulada a la Junta de Castilla y León por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a política general en materia de deporte.

30633



Páginas

451. Mociones

M/000021-01

Moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a política general en materia de agricultura, consecuencia de la Interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria de 16 de abril de 2013.

30634

M/000129-01

Moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a política general en materia de universidades, consecuencia de la Interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria de 16 de abril de 2013.

30637

470. Propositiones No de Ley

PNL/000750-02

Retirada de la Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando a la Junta de Castilla y León a modificar o impulsar la modificación de la normativa legal y reglamentaria en materia de urbanismo para definir sistemas de gestión urbanística que permitan regularizar las actuaciones urbanísticas irregulares en suelo rústico, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 207, de 25 de marzo de 2013.

30639

PNL/000771-02

Retirada de la Proposición No de Ley presentada por los Procuradores D.^a María Ángela Marqués Sánchez, D. Javier Campos de la Fuente, D. Miguel Ángel Fernández Cardo, D.^a Ana María da Silva García y D.^a Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez, instando a la Junta de Castilla y León a iniciar un proceso real de diálogo con las familias afectadas por la eliminación del primer ciclo de la educación secundaria obligatoria en el curso 2013-2014 en las localidades de Vega de Espinareda, Toral de los Vados y Riaño (León), y a no tomar ninguna decisión sobre la eliminación de los grupos de primero y segundo de la ESO sin el respaldo de las familias afectadas, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 222, de 19 de abril de 2013.

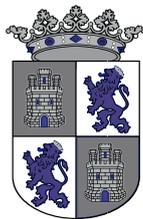
30640

PNL/000800-01

Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando a la Junta de Castilla y León a ejercer las competencias que estatutariamente se reconocen a la Comunidad en materia de vivienda, derecho de consumidores y usuarios y protección social de las familias,



	<u>Páginas</u>
para proteger a los individuos y familias de Castilla y León de la pérdida de sus viviendas como consecuencia de procesos de ejecución hipotecaria, para su tramitación ante el Pleno.	30641
PNL/000801-01	
Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España para exigirle la retirada del anteproyecto de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa así como para abrir un proceso de diálogo en relación con el análisis de las necesidades y los objetivos del sistema educativo español, para su tramitación ante el Pleno.	30644
PNL/000802-01	
Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Sr. González Suárez (IU), instando a la Junta de Castilla y León a la presentación de un proyecto de ley para hacer efectivo el ejercicio del derecho constitucional y estatutario a una vivienda digna y adecuada, para su tramitación ante el Pleno.	30647
PNL/000803-01	
Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, instando a la Junta de Castilla y León para que, compartiendo el acuerdo alcanzado por la misma con CCOO, UGT, CECALE, las entidades locales y organizaciones del tercer sector, aproveche las herramientas pactadas para prestar la cobertura necesaria a las familias que como consecuencia de la crisis económica se enfrentan a procedimientos de ejecución hipotecaria sobre su vivienda habitual, para su tramitación ante el Pleno.	30649



1. PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS

110. Proyectos de Ley

PL/000017-01

*Proyecto de Ley de ordenación, servicios y gobierno del territorio de la Comunidad de Castilla y León.
Apertura del plazo de presentación de enmiendas hasta las 14:00 horas del día 27 de mayo de 2013.*

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de abril de 2013, ha conocido el Proyecto de Ley de ordenación, servicios y gobierno del territorio de la Comunidad de Castilla y León, PL/000017, y ha ordenado su publicación, el traslado a la Comisión de la Presidencia y la apertura de un plazo de presentación de enmiendas que finalizará a las 14:00 horas del día 27 de mayo de 2013.

Con esta misma fecha se remite a la Presidencia de la Comisión de la Presidencia.

En ejecución de dicho Acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de abril de 2013.

LA SECRETARIA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

LA PRESIDENTA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN,
Fdo.: María Josefa García Cirac

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, adjunto remito a V.E. "**Proyecto de Ley de ordenación, servicios y gobierno del territorio de la Comunidad de Castilla y León**", así como Certificación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León en su reunión del día 4 de abril de 2013, por el que se aprueba el citado Proyecto.

Asimismo por ser de interés para la tramitación del Proyecto de Ley, se adjuntan:

1) Memoria elaborada por la Dirección de Ordenación del Territorio y Administración Local de la Consejería de la Presidencia.

2) Memoria del análisis de impacto económico-financiero elaborada por la Dirección de Ordenación del Territorio y Administración Local de la Consejería de la Presidencia.

3) Informe de la Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Consejería de Hacienda.

4) Certificado del Secretario del Pleno del Consejo de Cooperación Local de Castilla y León.

5) Alegaciones aceptadas.

6) Informe de la Dirección de los Servicios Jurídicos de la Junta de Castilla y León.



7) Informe previo del Consejo Económico y Social de la Comunidad de Castilla y León.

8) Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León.

Valladolid, a 11 de abril de 2013.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: José Antonio de Santiago-Juárez López

JOSÉ ANTONIO DE SANTIAGO-JUÁREZ LÓPEZ, CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA Y SECRETARIO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN.

CERTIFICO: Que en el Acta del Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, celebrado el día cuatro de abril de dos mil trece, figura la aprobación de un Acuerdo, a propuesta del Consejero de la Presidencia, cuyo contenido es del tenor literal siguiente:

"Aprobar el proyecto de Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León.

Y su remisión a las Cortes de Castilla y León para su tramitación correspondiente."

Y para que conste y surta los efectos oportunos firmo la presente en Valladolid, a cuatro de abril de dos mil trece.

PROYECTO DE LEY DE ORDENACIÓN, SERVICIOS Y GOBIERNO DEL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

ÍNDICE

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

TÍTULO PRELIMINAR

- Artículo 1.- Objeto y ámbito.
- Artículo 2.- Fines de la ley y conceptos utilizados.

TÍTULO I DE LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

- Artículo 3.- Las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio.
- Artículo 4.- Las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio rurales.
- Artículo 5.- Las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio urbanas.
- Artículo 6.- Elaboración del mapa de unidades básicas de ordenación y servicios del territorio.
- Artículo 7.- Las áreas funcionales.
- Artículo 8.- Las áreas funcionales estables.
- Artículo 9.- Las áreas funcionales estratégicas.



TÍTULO II DE LOS SERVICIOS EN EL TERRITORIO

CAPÍTULO I LOS SERVICIOS AUTONÓMICOS EN EL TERRITORIO

- Artículo 10.- El mapa de unidades básicas de ordenación y servicios del territorio y los servicios autonómicos.
- Artículo 11.- Prestación de los servicios autonómicos en el ámbito rural.
- Artículo 12.- Prestación de los servicios autonómicos en el ámbito urbano.
- Artículo 13.- Igualdad de acceso de los ciudadanos a los servicios autonómicos.

CAPÍTULO II COORDINACIÓN INTERADMINISTRATIVA Y EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS

- Artículo 14.- Medidas de colaboración interadministrativa en el desarrollo de competencias propias.
- Artículo 15.- Comisiones Provinciales de Colaboración de políticas públicas en el territorio.
- Artículo 16.- Competencias y funciones concurrentes.
- Artículo 17.- Duplicidad de competencias o funciones.
- Artículo 18.- Pormenorización de funciones en las normas autonómicas.

CAPÍTULO III ATRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS

- Artículo 19.- Atribución de competencias.
- Artículo 20.- Memoria de implantación del servicio.

TÍTULO III DE LA GOBERNANZA LOCAL

CAPÍTULO I PRINCIPIOS GENERALES

- Artículo 21.- Descentralización.
- Artículo 22.- Eficiencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
- Artículo 23.- Proporcionalidad.

CAPÍTULO II LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y EL GOBIERNO ABIERTO

- Artículo 24.- Administración electrónica.
- Artículo 25.- Principios del gobierno abierto local.
- Artículo 26.- Transparencia.
- Artículo 27.- Derecho de acceso a la información pública.
- Artículo 28.- Participación y colaboración ciudadana.
- Artículo 29.- Ética pública y buen gobierno.



CAPÍTULO III DE LA DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS Y ENCOMIENDA DE GESTIÓN

- Artículo 30.- Delegación de competencias y funciones entre las administraciones locales.
- Artículo 31.- Encomienda de gestión entre administraciones locales.

TÍTULO IV DE LAS MANCOMUNIDADES DE INTERÉS GENERAL

CAPÍTULO I RÉGIMEN GENERAL

- Artículo 32.- Régimen jurídico de las mancomunidades de interés general.
- Artículo 33.- Declaración de las mancomunidades de interés general.
- Artículo 34.- Causas de la pérdida de calificación de mancomunidad de interés general.
- Artículo 35.- Procedimiento de la pérdida de calificación de mancomunidad de interés general.
- Artículo 36.- Órganos de gobierno de las mancomunidades de interés general.

CAPÍTULO II LAS MANCOMUNIDADES DE INTERÉS GENERAL RURALES

- Artículo 37.- Las mancomunidades de interés general rurales.
- Artículo 38.- Procedimiento de constitución.
- Artículo 39.- Modificación, fusión o supresión de mancomunidades para constituir mancomunidades de interés general rurales.
- Artículo 40.- Reglas de adopción de acuerdos.
- Artículo 41.- Competencias y funciones.

CAPÍTULO III LAS MANCOMUNIDADES DE INTERÉS GENERAL URBANAS

- Artículo 42.- Las mancomunidades de interés general urbanas.
- Artículo 43.- Procedimiento de constitución.
- Artículo 44.- Reglas de adopción de acuerdos.
- Artículo 45.- Competencias y funciones.

CAPÍTULO IV LA PROVINCIA EN RELACIÓN CON LAS MANCOMUNIDADES DE INTERÉS GENERAL RURALES

- Artículo 46.- Ámbito competencial de las provincias en relación con las mancomunidades de interés general rurales.
- Artículo 47.- Competencias y funciones.
- Artículo 48.- Consorcios provinciales de servicios generales.
- Artículo 49.- Régimen jurídico de los consorcios provinciales de servicios generales.



- Artículo 50.- Constitución de los consorcios provinciales de servicios generales.
- Artículo 51.- Competencias y funciones de los consorcios provinciales de servicios generales.

CAPÍTULO V PERSONAL Y RÉGIMEN ECONÓMICO FINANCIERO

- Artículo 52.- Planificación y gestión del personal.
- Artículo 53.- Régimen del personal al servicio de las mancomunidades de interés general.
- Artículo 54.- Criterios relativos a los funcionarios con habilitación de carácter estatal.
- Artículo 55.- Personal auxiliar de apoyo al puesto de funcionario con habilitación de carácter estatal sostenido en común por municipios que estén asociados a una mancomunidad de interés general.
- Artículo 56.- La potestad tributaria y el presupuesto de las mancomunidades de interés general.
- Artículo 57.- Aportaciones económicas de los municipios asociados a las mancomunidades de interés general.
- Artículo 58.- Apoyo económico a las mancomunidades de interés general por otras administraciones.
- Artículo 59.- Coordinación y garantía de eficiencia en el funcionamiento de las mancomunidades de interés general.

TÍTULO V DE LA FUSIÓN DE MUNICIPIOS

- Artículo 60.- Régimen de las fusiones de municipios.
- Artículo 61.- Fusión de municipios y ordenación del territorio.
- Artículo 62.- Fusión de municipios de distintas mancomunidades de interés general.
- Artículo 63.- Fomento de las fusiones de municipios.

DISPOSICIONES ADICIONALES

- Primera. Enclave de Treviño.
- Segunda. La Comarca de El Bierzo.
- Tercera. Integración de los servicios de transporte público de viajeros por carretera de usos especial y de usos general.
- Cuarta. Integración de centros residenciales de las corporaciones locales.
- Quinta. Limitación presupuestaria en los gastos del personal de las mancomunidades de interés general.
- Sexta. Mancomunidades de interés general rurales de municipios que estén en el entorno de un municipio de más de 20.000 habitantes.



- Séptima. Primera ocupación en destino definitivo del puesto de funcionario con habilitación de carácter estatal de la mancomunidad de interés general.
- Octava. Eficacia en el sostenimiento en común de un puesto único y primera ocupación en destino definitivo.
- Novena. Mancomunidades de aguas.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

- Única Derogación normativa.

DISPOSICIONES FINALES

- Primera. Modificación de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León.
- Segunda. Modificación de la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León.
- Tercera. Modificación de la Ley 3/2008, de 17 de junio, de aprobación de directrices esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León.
- Cuarta. Modificación de la Ley 8/2009, de 16 de junio, de transferencia de competencias entre la Comunidad Autónoma y las entidades locales de Castilla y León.
- Quinta. Modificación de la Ley 8/2010, de 30 de agosto, de Ordenación del Sistema de Salud de Castilla y León.
- Sexta. Modificación de la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de servicios sociales de Castilla y León.
- Séptima. Adaptación progresiva de los servicios autonómicos rurales al mapa de unidades básicas de ordenación y servicios rurales.
- Octava. Mapa concesional de transporte interurbano de viajeros por carretera de Castilla y León.
- Novena. Modificaciones y simplificación normativas para evitar duplicidades administrativas.
- Décima. Implantación de la Administración electrónica en el ámbito local.
- Decimoprimera. Reestructuración de los puestos de trabajo de funcionarios con habilitación con carácter estatal sostenidos en común.
- Decimosegunda. Entidades Locales Menores.
- Decimotercera. Participación de las entidades locales en los ingresos propios de la Comunidad de Castilla y León.
- Decimocuarta. Habilitación normativa.
- Decimoquinta. Entrada en vigor.

ANEXO.



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

La ordenación del territorio es un proceso complejo, cuyo objetivo es promover un desarrollo equilibrado y sostenible, aumentar la cohesión económica y social y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Su dificultad deriva de la propia complejidad de la organización de la sociedad a la que sirve y, en el caso de nuestra Comunidad Autónoma, de sus singulares características territoriales y sociodemográficas, que convierten un proceso de esta magnitud en un verdadero reto.

De este modo, y partiendo de la base de que cualquier política de ordenación debe tener a la población como una de sus prioridades fundamentales, su objetivo debe ser dar respuesta a la realidad del territorio en que esa población se asienta y a sus problemas. Castilla y León es una Comunidad muy extensa y diversa, lo que dificulta, en muchos casos, la accesibilidad a los servicios. A su vez, el reducido tamaño de muchos de nuestros municipios imposibilita en algunas de estas corporaciones la dotación y mantenimiento de los servicios mínimos indispensables, e incluso, el propio mantenimiento de una estructura administrativa. Por ello cobra especial importancia en Castilla y León el papel que juegan las administraciones supramunicipales, como las Diputaciones Provinciales o las mancomunidades en la prestación de estos servicios.

En suma la ordenación del territorio en Castilla y León debe sustentarse en el respeto a las singularidades y condiciones del propio territorio y a sus rasgos naturales e históricos. Debe garantizar el cumplimiento de las exigencias impuestas desde el punto de vista presupuestario, con especial atención a los principios de suficiencia financiera y estabilidad presupuestaria. Y debe asimismo partir del hecho de que Castilla y León, en la práctica, ha venido realizando ya una progresiva labor de ordenación de su territorio muy vinculada a la propia implantación de los distintos servicios e infraestructuras públicas, sin perjuicio del desarrollo de instrumentos de planificación territorial, en aplicación de la normativa específica de ordenación del territorio.

Desde este planteamiento, en Castilla y León se ha decidido dar un paso más e impulsar un nuevo modelo de ordenación y gobierno del territorio, que se adapte y responda a las nuevas exigencias de la sociedad, siguiendo un proceso de explicación y consulta marcado por la participación, el diálogo y la búsqueda de consenso.

En este proceso han participado las administraciones públicas, autonómica y local, los partidos políticos con representación parlamentaria y los agentes sociales y económicos implicados, con el fin de alcanzar un gran acuerdo político y social en esta materia. El 10 de octubre de 2012 se suscribió un acuerdo básico entre la Junta de Castilla y León, el Partido Popular de Castilla y León y el Partido Socialista de Castilla y León en materia de ordenación, servicios y gobierno en el territorio, que constituye la base de la presente norma.

Son objetivos de este modelo definir un ámbito territorial esencial que constituya la referencia espacial y el parámetro básico para efectuar la ordenación del territorio, coordinar la planificación sectorial de los servicios autonómicos y locales, y adecuar progresivamente al nuevo modelo territorial los servicios que presta la Junta de Castilla y León. Del mismo modo, el modelo acordado busca fortalecer los municipios rurales, mejorar la cooperación entre los núcleos urbanos y sus alfores, y entre las entidades locales menores y los



municipios a los que pertenecen, modernizar el papel de las Diputaciones Provinciales, e impulsar la asociación voluntaria de municipios para la gestión común de servicios como garantía de una prestación más eficiente. Finalmente, son también objetivos de esta ley los de consolidar la cooperación financiera local de la Comunidad Autónoma, clarificar los ámbitos competenciales respectivos de la administración local y autonómica, para evitar duplicidades, y fomentar un mayor equilibrio y cohesión territorial en Castilla y León.

Estos objetivos se enmarcan dentro de unos principios básicos bien definidos como son la defensa de la autonomía local, el fomento de fórmulas de gobierno y gestión de los servicios locales sustentadas en economías de escala y en la optimización de los recursos municipales, reorganizando las actuales mancomunidades y evitando, en todo caso, la creación de nuevas estructuras administrativas y, por último, la colaboración y cooperación entre administraciones y la simplificación administrativa de la gestión pública.

II

Este nuevo modelo territorial acordado, así como sus objetivos y principios, encuentra su plasmación en la presente Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León. En ella, en su vertiente de norma que regula la ordenación del territorio en Castilla y León, se pretende mejorar la cohesión territorial de la Comunidad, impulsar una mayor cercanía en la prestación de servicios y garantizar el acceso de los ciudadanos a los mismos, independientemente de su lugar de residencia.

Además, esta ley pretende culminar el camino de la “territorialización” de las políticas autonómicas, y en este sentido prevé la adaptación de las zonificaciones de los servicios prestados por la Administración de la Comunidad de Castilla y León en el ámbito rural a las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio que la ley prevé, y que constituirán a partir de la misma el nuevo parámetro básico para la ordenación del territorio.

Por último, la ley impulsa un modelo que, a través del fomento de asociaciones voluntarias de municipios, pretende hacer más eficaz y eficiente la gestión de las competencias municipales. La eficiencia debe presidir siempre la gestión de los recursos públicos, y especialmente tras la aprobación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de Abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, dictada en desarrollo del modificado artículo 135 de la Constitución, cuyo artículo 7 eleva a la categoría de principio general el principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.

Esta Ley Orgánica regula una serie de medidas preventivas, correctivas y coercitivas que pueden llegar a suponer en el caso de las Corporaciones Locales, y según el apartado 3 de su artículo 26, la disolución de los órganos de la Corporación Local incumplidora. La presente ley pretende dotar a las corporaciones locales de un instrumento, las mancomunidades de interés general, que presentan importantes ventajas respecto de las numerosas mancomunidades existentes en este momento, y permite gestionar con eficiencia los recursos municipales a través de la generación de economías de escala.

III

Esta Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León se dicta en ejercicio de las competencias atribuidas a la Comunidad, con carácter exclusivo, y que se encuentran recogidas en distintos apartados del artículo 70.1 del Estatuto de Autonomía, en las siguientes materias: “Estructura y organización de la Administración



de la Comunidad.” apartado 2º, “Organización territorial de la Comunidad. Relaciones entre las instituciones de la Comunidad y los entes locales y regulación de los entes locales creados por la Comunidad, en los términos previstos en el presente Estatuto.” apartado 4º y “Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.” apartado 6º.

Y en ejercicio de la competencia de desarrollo normativo y ejecución prevista en el artículo 71.1.1º: “Régimen Local”.

Destacar asimismo que esta ley está inspirada en los principios rectores que, según dispone el artículo 16 del Estatuto de Autonomía, han de orientar las políticas públicas, y especialmente los previstos en el apartado 1 de este artículo “La prestación de unos servicios públicos de calidad.” y en el apartado 10 “La modernización y el desarrollo integral de las zonas rurales de Castilla y León, dotándolas de infraestructuras y servicios públicos suficientes”.

Por otra parte con esta ley se atiende a las previsiones contenidas en el título III del propio Estatuto de Autonomía dedicado a la Organización Territorial, en el que se recoge como principio básico la promoción de la cohesión y el equilibrio de todos los territorios de la Comunidad.

IV

Por último se procede a una breve exposición de la estructura y contenido de la ley.

La Ley consta de un total de sesenta y tres artículos, distribuidos en un título preliminar y cinco títulos y se completa con nueve disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y quince disposiciones finales.

En el título preliminar se establece el objeto, ámbito y fines de la ley. En concreto se determina, con la indicación expresa de que será de aplicación en todo el territorio de Castilla y León, que la ley tiene por objeto delimitar los espacios funcionales para efectuar la ordenación territorial, planificar y programar en el territorio los servicios prestados por la Administración de la Comunidad de Castilla y León y potenciar fórmulas de gobierno y administración local más eficientes, especialmente las de carácter asociativo voluntario, así como fomentar la solidaridad de la comunidad municipal.

Además se hace referencia a que los conceptos utilizados en esta ley tendrán el sentido que para cada uno de ellos se concreta en el anexo a la ley.

El título primero está dedicado a la ordenación del territorio. En primer lugar regula las unidades básicas de la ordenación y servicios del territorio que se constituyen como la referencia espacial y parámetro básico para el desarrollo de la ordenación del territorio en Castilla y León, y que pueden ser rurales o urbanas. En segundo lugar prevé la elaboración de un mapa de unidades básicas de ordenación y servicios del territorio determinando el procedimiento para su aprobación, y por último regula las áreas funcionales distinguiendo entre las estables dirigidas a impulsar una planificación conjunta de los grandes municipios y su entorno o alfoz y las estratégicas, con una fuerte vocación de dinamización del medio rural.

El título segundo se destina a los servicios en el territorio y está dividido en tres capítulos.

El primero regula la prestación de los servicios autonómicos en el territorio, tanto en el ámbito urbano como en el rural. El segundo establece los mecanismos para la coordinación interadministrativa y la eficiencia de los servicios autonómicos, regulando las Comisión



Provinciales de Colaboración de políticas públicas en el territorio. Y el capítulo tercero se dedica a la atribución de competencias a las entidades locales.

El título tercero, que contiene tres capítulos, se titula de la gobernanza local. En el primer capítulo se recogen los principios generales de la gobernanza local que son la descentralización, eficiencia, estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y proporcionalidad.

El segundo recoge los elementos esenciales de la administración electrónica y el gobierno abierto en el ámbito local.

Y el tercero regula la delegación de competencias y la encomienda de gestión entre administraciones locales.

El título cuarto bajo la rúbrica de las mancomunidades de interés general contiene, en cinco capítulos, la regulación de estas entidades.

El capítulo primero contiene el régimen general de las mancomunidades de interés general, clasificándolas en rurales y urbanas, y regulando el procedimiento para su declaración como mancomunidades de interés general, las causas y el procedimiento de la pérdida de dicha calificación y sus órganos de gobierno.

El segundo y el tercero se dedican a las mancomunidades de interés general rurales y urbanas respectivamente, recogiendo su procedimiento de constitución, las reglas de adopción de acuerdos y sus competencias y funciones, entre otras cuestiones.

El capítulo cuarto está destinado a la provincia en relación con las mancomunidades de interés general rurales, y contiene el régimen jurídico, constitución, competencias y funciones de los consorcios provinciales de servicios generales.

Y en el capítulo quinto se establece el régimen de personal y el régimen económico financiero de las mancomunidades de interés general.

Por último, en el título quinto de la ley se regula el régimen de la fusión de municipios y se introducen medidas de fomento a dichas fusiones.

Finalmente la ley cuenta con nueve disposiciones adicionales en las que se establecen determinadas consideraciones respecto de la aplicación de la ley a cuestiones y situaciones específicas, una disposición derogatoria en la que se deroga expresamente la disposición adicional tercera de la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León, y las quince disposiciones finales.

En estas se procede a la modificación de diversas leyes para adaptarlas al contenido de esta ley, se recogen mandatos y habilitaciones para garantizar el desarrollo y ejecución de esta ley y se establece su entrada en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1.- Objeto y ámbito.

La presente ley, que será de aplicación en todo el territorio de Castilla y León, tiene por objeto:

a) Delimitar los espacios funcionales para efectuar la ordenación territorial, en aplicación de la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma.



b) Planificar y programar los servicios autonómicos, de acuerdo con el modelo territorial, en aplicación de la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma.

c) Potenciar fórmulas de gobierno y administración local más eficientes, especialmente las de carácter asociativo voluntario, así como fomentar la solidaridad de la comunidad municipal, en aplicación de la competencia de desarrollo normativo y de ejecución de la Comunidad Autónoma.

Artículo 2.- Fines de la ley y conceptos utilizados.

1. La regulación contenida en esta ley, en el marco de los principios de estabilidad presupuestaria y suficiencia financiera, tiene por finalidad:

a) Establecer una mejor adecuación e implantación en el territorio de las distintas políticas sectoriales, desarrolladas por la Administración autonómica y por las entidades locales de Castilla y León.

b) Determinar el proceso participativo para la configuración de los citados espacios territoriales.

c) Lograr una mayor cohesión y solidaridad territorial, potenciando el desarrollo económico y social sostenible y equilibrado de las diversas zonas de la Comunidad Autónoma.

d) Impulsar la cercanía a los ciudadanos en la gestión y prestación de los servicios.

e) Conseguir unos servicios públicos más eficaces y eficientes, que eviten duplicidades administrativas a través de la puesta a disposición de las entidades locales de instrumentos de organización basados en el asociacionismo local de carácter voluntario, y mejorar la gobernanza local.

2. A los efectos de esta Ley, los conceptos sobre la ordenación, servicios y gobierno del territorio, se entenderán utilizados en el sentido que para cada uno de ellos se concreta en el anexo al presente texto.

TÍTULO I

DE LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Artículo 3.- Las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio.

1. Las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio son espacios funcionales delimitados geográficamente, que constituyen la referencia espacial y el parámetro básico para el desarrollo de la ordenación del territorio de Castilla y León.

2. La delimitación de las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio se establecerá por la Junta de Castilla y León en un mapa de ordenación territorial que incluirá a todos los municipios de la Comunidad Autónoma.

3. Las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio pueden ser rurales o urbanas.



Artículo 4.- Las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio rurales.

1. La unidad básica de ordenación y servicios del territorio rural agrupa a municipios iguales o menores de 20.000 habitantes de una provincia, con continuidad geográfica y con características similares, que cumpla alternativamente alguna de las siguientes reglas:

a) En función de su tamaño, que la población total de la unidad básica tenga, como mínimo, 5.000 habitantes, y como máximo 30.000.

b) En función de la dispersión, que la unidad básica tenga una densidad menor de 15 habitantes por kilómetro cuadrado, y como mínimo agrupe a 5 municipios.

2. Por razones geográficas singulares, históricas, económicas, medioambientales o de cualquier otra índole, la Junta de Castilla y León podrá motivadamente disponer la configuración de unidades básicas que no cumplan las anteriores reglas, sin perjuicio de lo previsto en la Disposición adicional primera.

3. Excepcionalmente, la unidad básica de ordenación y servicios del territorio rural podrá agrupar a municipios de más de una provincia.

Artículo 5.- Las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio urbanas.

Son unidades básicas de ordenación y servicios del territorio urbanas cada uno de los municipios con más de 20.000 habitantes de la Comunidad de Castilla y León.

Artículo 6.- Elaboración del mapa de unidades básicas de ordenación y servicios del territorio.

1. Las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio, tanto rurales como urbanas, se incluirán en un mapa que será aprobado por Decreto de la Junta de Castilla y León.

2. Las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio rurales se delimitarán, a través de su inclusión en el mapa, de acuerdo con el siguiente procedimiento:

a) Cada Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de esta ley, elaborará un estudio de zonificación, y lo elevará a la Consejería competente en materia de administración local, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 4 de esta ley.

b) La Consejería, analizado el estudio anterior, y oídas las Diputaciones Provinciales, que deberán evacuar su informe en el plazo de un mes, elaborará una propuesta inicial de delimitación del mapa de unidades básicas de ordenación y servicios del territorio rurales y, por lo tanto, del conjunto de municipios que integran cada una de ellas.

c) La propuesta inicial de delimitación del mapa será sometida a audiencia de los municipios y estará sujeta a información pública por parte de la Consejería competente en materia de administración local, durante el plazo de un mes, mediante su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.

d) Para la constitución de unidades básicas de ordenación y servicios del territorio rurales que agrupen a municipios de varias provincias será necesario el informe de las Diputaciones Provinciales interesadas.

3. La Consejería, después de analizar las alegaciones presentadas, formulará una propuesta definitiva del mapa de las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio, para su aprobación definitiva por la Junta de Castilla y León.



4. Cualquier modificación posterior del mapa seguirá la tramitación prevista en los apartados anteriores.

Artículo 7.- Las áreas funcionales.

1. Las áreas funcionales son espacios delimitados geográficamente para el desarrollo de la ordenación del territorio de Castilla y León y la aplicación de sus instrumentos y herramientas de planificación y gestión.

2. Las áreas funcionales pueden ser estables, que perdurarán en el tiempo, o estratégicas, que tendrán una duración determinada.

Artículo 8.- Las áreas funcionales estables.

1. El área funcional estable es aquella integrada por la unidad básica de ordenación y servicios del territorio urbana y los municipios de su entorno o alfoz con los que mantiene relaciones funcionales que precisan una planificación conjunta.

2. El área funcional estable quedará constituida por cada una de las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio urbanas y sus municipios colindantes inmediatos, así como por los colindantes de estos últimos siempre que estén a una distancia máxima de 15 Kilómetros del municipio de mayor población.

A estos efectos el criterio para la delimitación del área funcional estable vendrá determinado por la distancia en línea recta entre los municipios, tomando como referencia la sede del ayuntamiento de su capital conforme a la cartografía oficial ofrecida por el Centro de Información Territorial de Castilla y León u órgano que le sustituya.

En la determinación de la colindancia de los municipios no se tendrán en cuenta los posibles enclaves territoriales de un municipio situados dentro del término municipal de otro. De igual forma, tampoco se considerarán, existiendo en término municipal discontinuo, aquellos territorios en los que no esté la capitalidad del municipio.

3. Cuando existan dos o más unidades básicas de ordenación y servicios del territorio urbanas colindantes, todas ellas se integran en una única área funcional estable, bajo la denominación de aquella que sea la capital de provincia, o tenga mayor población.

Para la delimitación en el supuesto previsto en el párrafo anterior, las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio urbanas de menor población constituirán la primera línea de colindancia de la unidad básica de ordenación y servicios del territorio urbana de mayor población.

4. La Junta de Castilla y León, previa audiencia de los municipios afectados y de la Diputación Provincial correspondiente, dictará Acuerdo por el que se declaren las áreas funcionales estables constituidas conforme a los criterios establecidos en este artículo, que será publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León, todo ello con carácter previo a la elaboración del correspondiente instrumento de ordenación del territorio de ámbito subregional.

Artículo 9.- Las áreas funcionales estratégicas.

1. Se podrán constituir áreas funcionales estratégicas integradas por una unidad básica de ordenación y servicios del territorio o por varias contiguas, para el impulso de programas de desarrollo en aquellas zonas de menor dinamismo económico y demográfico, o afectadas por circunstancias extraordinarias.



2. El área funcional estratégica se delimitará mediante el correspondiente instrumento de ordenación del territorio de ámbito subregional, indicando las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio que la integran.

No obstante, y antes del inicio del procedimiento de aprobación del instrumento de ordenación, se dará audiencia a la Diputación o Diputaciones Provinciales interesadas para la definición inicial del ámbito del área funcional estratégica.

3. Las áreas funcionales estratégicas se extinguirán una vez alcanzados los objetivos perseguidos o cumplido el plazo previsto, todo ello de acuerdo con el instrumento de ordenación que las creó.

TÍTULO II

DE LOS SERVICIOS EN EL TERRITORIO

CAPÍTULO I

LOS SERVICIOS AUTONÓMICOS EN EL TERRITORIO

Artículo 10.- El mapa de unidades básicas de ordenación y servicios del territorio y los servicios autonómicos.

1. La Administración de la Comunidad de Castilla y León utilizará como base territorial para la planificación y programación de sus servicios urbanos y rurales, cuando el ámbito funcional deba ser inferior al de la provincia, la unidad básica de ordenación y servicios del territorio.

2. En aquellos casos en que sea preciso atender espacios de mayor extensión, siempre que el ámbito funcional sea inferior al de la provincia, la Administración Autonómica podrá prever la planificación, y programación de esos servicios a través de varias unidades básicas de ordenación y servicios completas.

3. La normativa autonómica sectorial correspondiente determinará el mínimo y el máximo de unidades básicas de ordenación y servicio del territorio, tanto rurales como urbanas, para efectuar la zonificación de los servicios autonómicos, dentro del plazo fijado en la Disposición final séptima.

4. Cuando por motivos de eficacia la prestación del servicio autonómico en el territorio aconseje un ámbito de prestación que no coincida exactamente con la unidad básica, éste se podrá acordar de forma motivada en la normativa sectorial correspondiente. En todo caso, deberá respetarse la coincidencia sustancial con la unidad básica.

5. Los servicios autonómicos que se presten en un ámbito territorial provincial o superior se registrarán por su normativa específica, con independencia, en su caso, de su ubicación en el territorio.

Artículo 11.- Prestación de los servicios autonómicos en el ámbito rural.

La prestación de los servicios autonómicos en el ámbito rural, desarrollados directamente o en colaboración con otras administraciones públicas, deberá atender a las unidades básicas de ordenación y servicios rurales.



Específicamente, se aplicará para los servicios esenciales, que se indican a continuación, la siguiente escala de unidades básicas de ordenación y servicios del territorio:

a) Para la prestación de la asistencia sanitaria, cada zona básica de salud deberá coincidir con una unidad básica de ordenación y servicios.

b) Para la prestación de los servicios sociales básicos, cada zona de acción social deberá comprender un mínimo de una unidad básica de ordenación y servicios y un máximo de tres.

c) Para la prestación de la educación obligatoria, cada zona educativa deberá comprender un mínimo de una unidad básica de ordenación y servicios y un máximo de cinco.

d) Para la prestación de los servicios de salud pública, cada demarcación de salud pública deberá comprender un mínimo de dos unidades básicas de ordenación y servicios y un máximo de seis.

Artículo 12.- Prestación de los servicios autonómicos en el ámbito urbano.

La prestación de los servicios autonómicos en el ámbito urbano, desarrollados directamente o en colaboración con otras administraciones públicas, respetará las diferentes divisiones territoriales que pueda prever la normativa sectorial de los diversos servicios públicos autonómicos.

Artículo 13.- Igualdad de acceso de los ciudadanos a los servicios autonómicos.

La Administración de la Comunidad de Castilla y León atenderá a la realidad territorial, especialmente la rural, en la prestación de sus servicios y en la gestión de sus diferentes políticas públicas, al objeto de contribuir a garantizar la igualdad de los ciudadanos castellanos y leoneses en el acceso a la prestación de los servicios públicos.

CAPÍTULO II

COORDINACIÓN INTERADMINISTRATIVA Y EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS

Artículo 14.- Medidas de colaboración interadministrativa en el desarrollo de competencias propias.

1. Con pleno respeto a las competencias propias, la Administración de la Comunidad de Castilla y León y las entidades locales promoverán la utilización de infraestructuras y espacios existentes para su uso en común, de cara a optimizar los recursos y mejorar la prestación de los servicios a los ciudadanos.

2. De igual forma, las administraciones públicas adoptarán las medidas necesarias en materia de administración electrónica, para hacer posible, entre ellas, el intercambio de información entre la Administración de la Comunidad de Castilla y León y las entidades locales.

3. La Administración de la Comunidad de Castilla y León, efectuará cuantas medidas de divulgación y gestión del Sistema de Información del Mercado Interior sean necesarias para hacer efectiva la presencia de las entidades locales en el mismo.



Artículo 15.- Comisiones Provinciales de Colaboración de políticas públicas en el territorio.

1. Al amparo del artículo 100 de la Ley de Régimen Local de Castilla y León, mediante Orden de la Consejería competente en materia de administración local se crearán las Comisiones Provinciales de Colaboración de políticas públicas en el territorio, con la finalidad de servir de órgano para el estudio, colaboración entre cada Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León y la correspondiente Diputación Provincial.

Dichos órganos deberán contar con una representación de las entidades locales integradas en la respectiva provincia. Podrá asistir a sus sesiones, con voz pero sin voto, un representante de la Administración del Estado en la provincia nombrado por ella a tal efecto.

2. Las Comisiones Provinciales de Colaboración de políticas públicas en el territorio arbitrarán los mecanismos de colaboración oportunos entre las distintas administraciones para el ejercicio de competencias concurrentes, que respectivamente tienen atribuidas, especialmente en relación con la prestación de servicios, en el ámbito provincial, en las competencias o funciones siguientes:

- a) Micropolígonos industriales.
- b) Promoción y difusión en materia de museos, teatros, patrimonio cultural y salas de exposiciones.
- c) Promoción y difusión turística.
- d) Medidas de fomento del desarrollo económico y social dirigidas a determinados sectores.
- e) Promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
- f) Protección y asistencia ciudadana y, específicamente, la campaña de seguridad invernal por nevadas.
- g) Cooperación al desarrollo.
- h) Políticas migratorias.

Artículo 16.- Competencias y funciones concurrentes.

La Administración de la Comunidad de Castilla y León y las entidades locales, cuando deban desarrollar competencias y funciones concurrentes o realizar actividades complementarias, respetarán los principios de colaboración, cooperación, responsabilidad, lealtad institucional y, en todo caso, los derivados de la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

La coordinación por la Comunidad de Castilla y León de las funciones propias de las entidades locales, y especialmente de las Diputaciones Provinciales, se producirá en los supuestos previstos en el artículo 104 de la Ley de Régimen Local de Castilla y León.

Artículo 17.- Duplicidad de competencias o funciones

1. Los entes locales de Castilla y León, para evitar la duplicidad de competencias o funciones, prestarán únicamente aquéllas amparadas por una norma que les atribuya la competencia o pormenore la función correspondiente o que les habilite para ejercerla.



2. Las duplicidades de competencias o funciones, en todo caso, serán objeto de corrección mediante la correspondiente modificación normativa, respetando la garantía institucional de las entidades locales, en los términos previstos en la Disposición final novena.

Artículo 18.- Pormenorización de funciones en las normas autonómicas.

Las normas de la Comunidad de Castilla y León que atribuyan, transfieran o deleguen nuevas competencias a las entidades locales, establecerán con precisión la materia, la competencia y la función que deban prestar aquéllas, los medios económicos que sean adecuados y suficientes y, en su caso, los correspondiente medios personales y materiales.

De igual forma, las normas que desarrollen reglamentariamente las leyes sectoriales autonómicas de atribución competencial a las entidades locales deberán establecer con precisión las funciones que deben prestar éstas.

CAPÍTULO III

ATRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS

Artículo 19.- Atribución de competencias.

1. Las entidades locales de Castilla y León ejercerán las competencias y funciones, en las materias que se prevean, en el marco de la legislación básica del Estado, de la Ley de Régimen Local de Castilla y León y de lo previsto en esta ley.

2. Las normas de la Comunidad de Castilla y León que atribuyan, transfieran o deleguen competencias a los municipios o los reglamentos que pormenoricen sus funciones, deberán valorar, conforme a los principios de eficacia, eficiencia y estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, los criterios de capacidad de gestión y capacidad financiera, teniendo en cuenta los tramos de población siguientes:

- a) Municipios con una población menor o igual a 1.000 habitantes.
- b) Municipios con una población mayor de 1.000 habitantes y menor o igual a 5.000 habitantes.
- c) Municipios con población mayor de 5.000 habitantes y menor o igual a 20.000 habitantes.
- d) Municipios con una población mayor de 20.000 habitantes.

La cifra de población de un municipio, a los efectos de esta ley, será la declarada de manera oficial en el último padrón municipal por el Instituto Nacional de Estadística u órgano que le sustituya.

Artículo 20.- Memoria de implantación del servicio.

Los anteproyectos de ley autonómica y los proyectos de disposiciones administrativas de carácter general que establezcan la prestación de servicios locales, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de Castilla y León, serán informados simultáneamente por las Consejerías competentes en materia de administración local y en materia de hacienda, para verificar que se incluyen en la memoria de elaboración de la norma, la evaluación de la necesidad y oportunidad de la implantación del servicio o actividad y el análisis del impacto económico y presupuestario, sin perjuicio del conocimiento o informe que deban realizar, en virtud de la correspondiente normativa sectorial, aquellos órganos colegiados de las diferentes consejerías en los que existan representantes locales, así como del informe que deba emitir el Consejo de Cooperación Local de Castilla y León.



TÍTULO III DE LA GOBERNANZA LOCAL

CAPÍTULO I PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 21.- Descentralización.

La atribución de competencias y funciones por la Comunidad de Castilla y León a los entes locales de Castilla y León deberá ajustarse, en todo caso, al principio de descentralización de conformidad con el cual dicha atribución se efectuará en atención a las características de la actividad pública de que se trate y a la capacidad de gestión de la entidad local.

Artículo 22.- Eficiencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

1. La gestión de los recursos de los entes locales de Castilla y León se regirá por el principio de eficiencia, principio que deberá presidir la planificación, programación y prestación de sus acciones y políticas públicas, e implicará la evaluación de sus resultados.

2. Los entes locales de Castilla y León aplicarán, en su ámbito propio, políticas de racionalización y austeridad del gasto y mejora de la gestión y, en todo caso, se sujetarán, en su acción de gobierno, a la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Artículo 23.- Proporcionalidad.

Las acciones desarrolladas y los instrumentos de intervención utilizados por los entes locales para el ejercicio de sus competencias y para la prestación de los servicios públicos, deberán ser equilibrados y proporcionados a los fines perseguidos y a las necesidades públicas atendidas.

CAPÍTULO II LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y EL GOBIERNO ABIERTO.

Artículo 24.- Administración electrónica.

Los entes locales de Castilla y León impulsarán el uso de medios electrónicos para la prestación de servicios, y para garantizar la efectividad del derecho de los ciudadanos a relacionarse con ellos por estos medios, en los términos previstos en la legislación básica estatal, especialmente, en el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 70 bis de la Ley de Bases del Régimen Local, y en lo relativo a sus comunicaciones internas con otras administraciones e instituciones públicas.

Artículo 25.- Principios del gobierno abierto local.

Los entes locales de Castilla y León deberán avanzar en formas de comunicación permanentes y bidireccionales con los ciudadanos, y ajustar su actuación a los principios de gobierno abierto, basado en valores de transparencia, colaboración y participación, mediante técnicas de información y comunicación.



Artículo 26.- Transparencia.

1. Los entes locales de Castilla y León, y el sector público de los mismos, integrado en el Inventario del Sector Público Local, se sujetarán en el ejercicio de la gestión pública al principio de transparencia, tanto en la adopción de decisiones como en su actividad pública.

2. Los entes locales de Castilla y León y el sector público de los mismos, publicarán, de forma periódica y actualizada, cuanta información sea relevante para garantizar la transparencia de su funcionamiento y actuación, con el alcance, en los términos y con los límites previstos en la legislación básica del Estado en la materia.

3. A estos efectos, deberán publicar esa información en sus sedes electrónicas o páginas web o mediante otras técnicas de información y comunicación.

Artículo 27.- Derecho de acceso a la información pública.

Los entes locales de Castilla y León facilitarán el acceso de todas las personas que lo soliciten a los contenidos y documentos que obren en su poder, en las condiciones y con los requisitos y limitaciones establecidos en la legislación básica del Estado y en la de la Comunidad de Castilla y León en la materia.

Artículo 28.- Participación y colaboración ciudadana.

1. Los entes locales de Castilla y León fomentarán la participación de las personas en los asuntos públicos de su competencia.

2. En particular, los entes locales establecerán mecanismos de consulta y participación que permitan a las personas formular sus opiniones, propuestas o sugerencias.

3. De igual forma, los ayuntamientos con población superior a 20.000 habitantes y las Diputaciones Provinciales podrán promover, en el ámbito de sus competencias, el fomento del dialogo social como factor de cohesión social y progreso económico.

Artículo 29.- Ética pública y buen gobierno.

Los entes locales de Castilla y León ajustarán su actuación al conjunto de principios de buen gobierno y de buena administración previstos en la normativa básica del Estado y en las normas autonómicas que resulten aplicables.

CAPÍTULO III

DE LA DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS Y ENCOMIENDA DE GESTIÓN

Artículo 30.- Delegación de competencias y funciones entre las administraciones locales.

1. En el marco de la normativa vigente, y respetando el principio de autonomía local, por razones de eficacia o eficiencia, las Diputaciones Provinciales, las entidades locales supramunicipales, los ayuntamientos y las entidades locales menores de Castilla y León podrán delegar, entre sí y dentro de su ámbito territorial, competencias y funciones.

2. La delegación se aprobará mediante acuerdo del correspondiente ente local y se publicará en el boletín oficial de la respectiva provincia, debiendo indicarse el alcance, contenido, condiciones y duración de ésta, así como el control que se reserve la entidad



local delegante y los medios personales, materiales y económicos asignados. La efectividad de la delegación requerirá su aceptación por el ente local interesado.

Artículo 31.- Encomienda de gestión entre administraciones locales.

1. Las entidades locales de Castilla y León podrán encomendar la realización de actividades de carácter material, técnico, de servicios, de gestión o tramitación de su competencia a otras entidades locales con capacidad de gestión, actuando éstas con sujeción plena a las instrucciones generales y particulares que se puedan dictar.

2. La encomienda de gestión se formalizará mediante convenio suscrito entre las administraciones locales interesadas, que se publicará en el boletín oficial de la provincia.

El convenio contendrá la determinación de la actividad encomendada, su vigencia, las facultades de dirección y control, y los recursos económicos precisos para llevarla a cabo, así como las instrucciones concretas, generales y particulares, para su correcta ejecución.

TÍTULO IV

DE LAS MANCOMUNIDADES DE INTERÉS GENERAL

CAPÍTULO I

RÉGIMEN GENERAL

Artículo 32.- Régimen jurídico de las mancomunidades de interés general.

1. Las mancomunidades de interés general se regularán por las previsiones que contempla la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León para las mancomunidades, con las especialidades establecidas en el artículo 32 de dicha ley, y por las previsiones fijadas en esta ley.

2. Las mancomunidades de interés general tienen la condición de entidad local de base asociativa y carácter voluntario, con personalidad jurídica propia y capacidad de obrar plena e independiente de los municipios que la integran, para el cumplimiento de sus fines específicos.

3. Su régimen jurídico será el establecido en sus estatutos, que deberán respetar, en todo caso, lo dispuesto en la presente ley y en sus disposiciones de desarrollo.

4. La asociación de un municipio a una mancomunidad de interés general no podrá afectar a la totalidad de competencias y funciones municipales. El municipio ejercerá por sí mismo aquéllas no incluidas en los estatutos de las mancomunidades de interés general.

5. Las mancomunidades de interés general pueden ser rurales o urbanas.

Artículo 33.- Declaración de las mancomunidades de interés general.

1. La declaración de mancomunidad de interés general se efectuará mediante Orden de la Consejería competente en materia de administración local, previa acreditación del cumplimiento de los requisitos expuestos en los artículos siguientes de esta ley y de los compromisos previstos en la Disposición adicional quinta de esta ley.



La Orden contendrá la denominación de la mancomunidad, los municipios que voluntariamente la integran y los estatutos, y será publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León e inscrita en el Registro de Entidades Locales, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Régimen Local de Castilla y León.

2. En todo caso, la constitución de la mancomunidad sólo tendrá efectividad respecto a los municipios que adopten el acuerdo de asociación.

Artículo 34.- Causas de la pérdida de calificación de mancomunidad de interés general.

La Consejería competente en materia de administración local acordará, mediante Orden, la pérdida de calificación de mancomunidad de interés general en los siguientes supuestos:

a) Cuando hayan cambiado las circunstancias sobre el cumplimiento de los requisitos que sirvieron para proceder a su calificación como de interés general.

b) Cuando exista un incumplimiento grave de las obligaciones asumidas por la mancomunidad de interés general.

Artículo 35.- Procedimiento de la pérdida de calificación de mancomunidad de interés general.

1. La pérdida de calificación de mancomunidad de interés general se acordará por la Consejería competente en materia de administración local, previa audiencia a la mancomunidad por el plazo de un mes.

2. La Orden de pérdida de calificación será notificada a la mancomunidad de interés general en el plazo de diez días desde su adopción.

3. Dicha Orden se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León, y se inscribirá, a iniciativa de la propia Consejería competente, en el Registro de Entidades Locales.

Artículo 36.- Órganos de gobierno de las mancomunidades de interés general.

Los estatutos de las mancomunidades de interés general deberán contener los siguientes órganos de gobierno:

a) Asamblea de Concejales, de la que formarán parte un representante electo de cada uno de los municipios de la mancomunidad de interés general.

b) Consejo Directivo, del que formarán parte determinados representantes electos de la Asamblea de Concejales, y que deberá reproducir en su composición la representatividad de dicha Asamblea.

c) Presidente, elegido de entre los representantes electos de la Asamblea de Concejales.

CAPÍTULO II

LAS MANCOMUNIDADES DE INTERÉS GENERAL RURALES

Artículo 37.- Las mancomunidades de interés general rurales.

1. La mancomunidad de interés general rural es la surgida de la asociación voluntaria entre municipios con población inferior o igual a 20.000 habitantes, que cumplan los requisitos previstos en esta ley.



El ámbito territorial de esta mancomunidad deberá coincidir sustancialmente con la unidad básica de ordenación y servicios del territorio rural, sin perjuicio de lo dispuesto en la Disposición adicional sexta.

No obstante, su ámbito territorial podrá coincidir sustancialmente con varias unidades básicas de ordenación y servicios del territorio rurales siempre que exista continuidad geográfica entre ellas, y no superen las cinco unidades.

2. Un municipio no podrá pertenecer a más de una mancomunidad de interés general rural.

3. Siempre que cumplan los requisitos previstos en esta ley, podrán tener la misma consideración las Comunidades de Villa y Tierra, Comunidades de Tierra, Asocios y otras entidades asociativas tradicionales.

Artículo 38.- Procedimiento de constitución.

Aquellos municipios que quieran constituirse en mancomunidad para ser declarada de interés general rural deberán seguir el procedimiento previsto en el Capítulo II del Título VI de la Ley de Régimen Local de Castilla y León, con las siguientes especialidades:

a) La iniciativa para la constitución deberá ser aprobada por todos o algunos de los municipios integrados en una unidad básica de ordenación y servicios del territorio rural, o en varias unidades completas, siempre que se manifiesten favorablemente a la asociación, como mínimo y alternativamente:

1º. La mayoría de los ayuntamientos que aglutinen más del 50% de la población global de los municipios integrados en cada una de las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio rurales.

2º. Los ayuntamientos asociados que reúnan el 70% de la población de cada una de las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio rurales.

b) La Asamblea de Concejales elaborará un proyecto de estatutos en el que necesariamente deberá contenerse la cartera común y homogénea de materias, competencias y funciones propias de las mancomunidades de interés general rurales.

c) Simultáneamente a la información pública, se recabarán informes de la Diputación o Diputaciones Provinciales interesadas, y de la Delegación o Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León afectadas, que se emitirán en el plazo de un mes.

d) Adoptado el acuerdo de aprobación de los estatutos por los municipios interesados, el expediente se remitirá a la Consejería competente en materia de administración local, en el plazo máximo de nueve meses desde el momento de la iniciativa.

Artículo 39.- Modificación, fusión o supresión de mancomunidades para constituir mancomunidades de interés general rurales.

1. La modificación o fusión de mancomunidades existentes, para convertirse en mancomunidad de interés general rural, cuando coincida sustancialmente su ámbito territorial con una unidad básica de ordenación y servicios del territorio o varias completas, se regirá por lo dispuesto en los artículos 37 y 38 de la Ley de Régimen Local de Castilla y León, siendo aplicables las especialidades establecidas en el artículo anterior de esta ley.



2. La supresión de una o varias mancomunidades existentes, cuyo ámbito territorial no coincida sustancialmente con una unidad básica de ordenación y servicios del territorio o varias completas, y la simultánea creación de una mancomunidad de interés general rural, se regirá por lo dispuesto en los artículos 37, 40.2 y 41 de la Ley de Régimen Local de Castilla y León, siendo aplicables las especialidades establecidas en el artículo anterior de esta ley.

3. En los procedimientos previstos en este artículo, se incorporará, en todo caso, certificación emitida por el secretario sobre los bienes y derechos de las mancomunidades, la plantilla y la relación de puestos de trabajo de ésta y las competencias y funciones desarrolladas, así como informe de la intervención sobre el estado de cuentas, derechos y obligaciones en vigor por cada competencia y función, y sobre las transferencias para gastos corrientes e inversiones por cada competencia o función.

4. En todo caso, las mancomunidades a suprimir continuarán prestando los servicios públicos que tuvieran encomendados, hasta que pasen a ser prestados efectivamente por la nueva mancomunidad de interés general rural.

5. Los procedimientos para la modificación, fusión o supresión de la mancomunidad o mancomunidades afectadas, y para la declaración de mancomunidad de interés general rural, podrán tramitarse paralelamente y tendrán un plazo de caducidad de nueve meses.

Artículo 40.- Reglas de adopción de acuerdos.

1. Los estatutos de la mancomunidad de interés general rural podrán contener las normas relativas al sistema de elección de los órganos de gobierno, así como la forma de designación y cese de sus miembros.

No obstante, ante la falta de previsión sobre el sistema de elección, se procederá a atribuir un voto por cada municipio asociado.

2. Asimismo, los estatutos de la mancomunidad de interés general rural podrán contener las normas relativas al sistema de adopción del resto de acuerdos no contemplados en el apartado anterior, determinándose una ponderación de los votos que asigne un valor al emitido por cada uno de los municipios en función de la variable o variables que puedan estipularse.

En defecto de previsión estatutaria sobre el sistema de ponderación del voto se aplicará como única variable la población, siendo los votos los siguientes:

De 1 habitante a 250 habitantes: 1 voto.

De 251 habitantes a 1.000 habitantes: 2 votos.

De 1.001 habitantes a 5.000 habitantes: 3 votos.

De 5.001 habitantes a 20.000 habitantes: 4 votos.

Sólo participarán en la votación los municipios que hayan asignado, para su ejercicio por la mancomunidad, la competencia o función a que se refiera la adopción del acuerdo correspondiente.



Artículo 41.- Competencias y funciones.

1. Las mancomunidades de interés general rurales incluirán en sus estatutos, en todo caso, una cartera común y homogénea de competencias y funciones de entre las materias previstas en la normativa de régimen local.

2. Reglamentariamente se desarrollará el régimen jurídico sobre:

a) Las competencias y funciones de las mancomunidades de interés general.

Las competencias y funciones se concretarán, para su asignación a la mancomunidad, por cada uno de los municipios asociados, en función del tramo de población al que pertenezcan.

b) Las competencias y funciones que deban ejercer desde el momento de su declaración, y los plazos en los que deberán ejercer el resto de las competencias y funciones incluidas en la cartera de servicios, previa audiencia a las Diputaciones Provinciales.

c) Las competencias y funciones a ejercer a través de consorcios provinciales de servicios generales, en los términos previstos en el artículo 51 de esta ley.

d) Las competencias y funciones que, siendo de titularidad de los municipios de más de 5.000 habitantes, se puedan asignar a la mancomunidad de interés general por ser de interés mutuo para ambos.

3. No se podrá realizar ninguna actividad administrativa municipal que directa o indirectamente suponga el ejercicio de las competencias previamente asignadas.

CAPÍTULO III

LAS MANCOMUNIDADES DE INTERÉS GENERAL URBANAS.

Artículo 42.- Las mancomunidades de interés general urbanas.

La mancomunidad de interés general urbana es la surgida de la asociación voluntaria entre los municipios con población superior a 20.000 habitantes y los municipios de su entorno o alfoz, que cumplan los requisitos previstos en esta ley.

En un área funcional estable solo podrá declararse una mancomunidad como de interés general urbana, a la que podrán asociarse todos o algunos de los municipios pertenecientes a dicho área.

Artículo 43.- Procedimiento de constitución.

1. Aquellos municipios que quieran constituirse en mancomunidad para ser declarada de interés general urbana deberán seguir el procedimiento previsto en el Capítulo II del Título VI de la Ley de Régimen Local de Castilla y León, y en el artículo 38 de la presente ley, con las siguientes especialidades:

a) La iniciativa para la constitución requerirá la manifestación favorable a la asociación, al menos del municipio de mayor población y, como mínimo, 1/3 de los municipios del área funcional estable o los municipios que representen 1/3 de la población del área funcional estable excluidos los de más de 20.000 habitantes.



b) La asamblea de concejales elaborará un proyecto de estatutos en el que necesariamente deberán contenerse las materias, competencias y funciones propias de la mancomunidad de interés general urbana.

2. La modificación, fusión, o supresión de mancomunidades existentes para convertirse en mancomunidades de interés general urbanas, se regirá por lo dispuesto en el artículo 39 de esta ley en lo que resulte de aplicación.

3. Los municipios menores de 20.000 habitantes incluidos en alguna de las áreas funcionales estables de Castilla y León podrán asociarse simultáneamente a una mancomunidad de interés general rural y a una mancomunidad de interés general urbana, siempre que sea para ejercer diferentes competencias y funciones, asignándose las mismas respectivamente conforme a lo regulado en el artículo 45.2.

Artículo 44.- Reglas de adopción de acuerdos.

1. Los estatutos de la mancomunidad de interés general urbana podrán contener las normas relativas al sistema de elección de los órganos de gobierno, así como la forma de designación y cese de sus miembros. En todo caso, el presidente será el que designe el municipio de mayor población.

No obstante, ante la falta de previsión sobre el sistema de elección del resto de los órganos de gobierno, se ponderará el voto en función de la variable de población de los municipios asociados, asignándose un 50% de los votos totales al municipio de mayor población, y el resto a los demás municipios en proporción a su número de habitantes, teniendo cada municipio como mínimo un voto.

2. Asimismo, los estatutos de la mancomunidad de interés general urbana podrán contener las normas relativas al sistema de adopción del resto de acuerdos, respetando en todo caso las siguientes reglas:

a) Sólo participarán en la votación los municipios que previamente hayan asignado la competencia o función a la que afecte el acuerdo.

b) Deberá determinarse un sistema de ponderación de los votos que asigne un valor al emitido por cada uno de los municipios.

En defecto de determinación estatutaria de este sistema, se aplicarán como criterios para la adopción de estos acuerdos lo previsto en el párrafo segundo del apartado primero de este artículo.

Artículo 45.- Competencias y funciones.

1. Las mancomunidades de interés general urbanas incluirán en sus estatutos las competencias y funciones que se acuerden, de entre las materias previstas en la normativa de régimen local. Especialmente, podrán incluir aquellas que se refieran al abastecimiento de agua, al saneamiento y depuración de aguas residuales, al transporte público intermunicipal de viajeros, y a la seguridad ciudadana, protección civil y extinción de incendios, u otras que se concreten reglamentariamente.

2. Definido el ámbito de actuación en los estatutos, y alcanzado el consenso entre el municipio con mayor población y todos o varios de los municipios interesados sobre la



efectiva prestación en común de un servicio por la mancomunidad de interés general urbana, y sobre los términos y fórmulas de gestión, dichos municipios acordarán la asignación de la correspondiente competencia o función.

No obstante, en el caso de que el municipio se encuentre integrado simultáneamente en una mancomunidad de interés general rural, deberá dejar sin efecto, mediante el correspondiente acuerdo, la asignación de esa competencia o función en esta mancomunidad, debiendo acreditar previamente, para ello, la liquidación total de los derechos y obligaciones derivados de dicha competencia o función.

3. No se podrá realizar ninguna actividad administrativa municipal que directa o indirectamente suponga el ejercicio de las competencias previamente asignadas.

CAPÍTULO IV

LA PROVINCIA EN RELACIÓN CON LAS MANCOMUNIDADES DE INTERÉS GENERAL RURALES

Artículo 46.- **Ámbito competencial de las provincias en relación con las mancomunidades de interés general rurales.**

1. Las Diputaciones Provinciales, sin perjuicio de las competencias y funciones que realicen con respecto a los municipios de menos de 20.000 habitantes, ejercerán estas mismas competencias y funciones respecto a las mancomunidades de interés general rurales, en el marco de las previsiones generales que establece la legislación de bases del régimen local del Estado, de acuerdo con la Ley de Régimen Local de Castilla y León, y con las previsiones de esta ley.

2. Las Diputaciones Provinciales, de acuerdo con la legislación de bases de régimen local del Estado, ejercerán las siguientes competencias:

- a) Coordinación y aseguramiento de servicios de competencia municipal.
- b) Asistencia y cooperación jurídica, económica, técnica y material.
- c) Prestación de servicios públicos supramunicipales.
- d) Cooperación en el fomento del desarrollo económico y social.
- e) Cooperación en la planificación en el territorio provincial.
- f) Fomento y administración de los intereses peculiares de la provincia.

3. Las Diputaciones Provinciales, de acuerdo con la legislación sectorial de la Comunidad Autónoma o del Estado, ejercerán las competencias en aquellos ámbitos materiales que se les atribuyan, o que les sean transferidos o delegados.

4. La Comunidad Autónoma promoverá que se lleven a cabo cuantas medidas resulten oportunas para la actualización de las funciones del ámbito competencial de las provincias.

Reglamentariamente se podrán pormenorizar las funciones que ejercerán las Diputaciones Provinciales en las competencias mencionadas en los apartados 2 y 3 de este artículo.



Artículo 47.- Competencias y funciones.

1. Las Diputaciones Provinciales ejercerán la competencia de coordinación de los servicios de los municipios de menos de 20.000 habitantes que presten por sí o asociados para la garantía de una prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial.

Además, mediante los instrumentos previstos legalmente, las Diputaciones Provinciales podrán ejercer las competencias y funciones de aquéllos.

2. Para garantizar la prestación integral y adecuada de servicios, las Diputaciones Provinciales, en el ámbito de la legislación de bases de régimen local, desarrollarán las funciones que se determinen normativamente, y en todo caso, las siguientes:

a) La aprobación anual de un plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia de los municipios y de las mancomunidades de interés general rurales.

b) Para asegurar el acceso de la población de la provincia al conjunto de los servicios mínimos de competencia municipal, las Diputaciones Provinciales podrán otorgar subvenciones y ayudas con cargo a sus fondos propios, a través de planes especiales.

3. Las Diputaciones Provinciales prestarán la asistencia y cooperación jurídica, económica, técnica y material a los municipios, especialmente a los de menor capacidad económica y de gestión y a las mancomunidades de interés general rurales.

En este ámbito, específicamente, las Diputaciones Provinciales asistirán a los municipios en la garantía del desempeño de las funciones públicas necesarias, y les prestarán apoyo en la selección y formación de su personal.

Artículo 48.- Consorcios provinciales de servicios generales.

Las Diputaciones Provinciales podrán constituir junto con las mancomunidades de interés general de su respectivo ámbito territorial, consorcios provinciales denominados de servicios generales para la prestación de servicios de ámbito local, quedando adscritos a las primeras.

De forma excepcional, podrán participar motivadamente en dichos consorcios los municipios de la provincia que ya dispongan de medios propios para la realización efectiva del servicio público consorciado de que se trate.

Artículo 49.- Régimen jurídico de los consorcios provinciales de servicios generales.

Los consorcios provinciales de servicios generales tendrán personalidad jurídica propia. Su régimen jurídico se determinará en los estatutos, que serán aprobados por los entes locales consorciados y deberán respetar lo previsto en esta ley.

Artículo 50.- Constitución de los consorcios provinciales de servicios generales.

1. Se constituirá, en su caso, un solo consorcio para la prestación de servicios generales en cada provincia.

2. Los estatutos del consorcio provincial de servicios generales deberán contener, en todo caso, su régimen orgánico, funcional y presupuestario, así como la cartera de servicios de ámbito local que van a ser prestados por el consorcio.



3. Los órganos de decisión estarán integrados por representantes de todas las entidades locales consorciadas en la proporción que se fije en los estatutos respectivos.

4. Ante la falta de previsión en los estatutos sobre el sistema de elección de los órganos de decisión o la adopción de otros acuerdos, se ponderará el voto en función de la variable de población de los entes consorciados, asignándose un 50% de los votos totales a la Diputación Provincial, y el resto a las mancomunidades de interés general, y, en su caso, a los municipios, en proporción a su número de habitantes, teniendo cada entidad local como mínimo un voto, correspondiendo, en todo caso, la presidencia al representante de la Diputación Provincial.

Artículo 51.- Competencias y funciones de los consorcios provinciales de servicios generales.

1. Los consorcios provinciales de servicios generales podrán prestar aquellos servicios de ámbito local de competencia de las Diputaciones Provinciales o asignados a las mancomunidades de interés general, que se refieran los residuos domésticos o, en su caso, a los residuos comerciales no peligrosos, a los micropolígonos industriales, u otros que se determinen reglamentariamente.

2. Los municipios asociados en una mancomunidad de interés general deberán condicionar la asignación de aquellas competencias y funciones que de forma reglamentaria se determinen previamente, a que su ejercicio sea prestado a través de un consorcio provincial de servicios generales.

Estas competencias y funciones, que deberán concretarse en los estatutos de la mancomunidad de interés general, serán prestadas por los municipios mientras no se constituya el consorcio provincial de servicios generales.

CAPÍTULO V

PERSONAL Y RÉGIMEN ECONÓMICO FINANCIERO

Artículo 52.- Planificación y gestión del personal.

1. La planificación y gestión del personal de las mancomunidades de interés general tendrá como principios de actuación contribuir a la consecución de:

a) la eficacia en la prestación de los servicios

b) la eficiencia en la utilización de los recursos humanos disponibles, mediante la dimensión adecuada de sus efectivos, su mejor distribución y movilidad

c) y el respeto a los derechos adquiridos por el personal y, en particular, del procedente de los municipios asociados o de las mancomunidades que se supriman o fusionen para constituir una mancomunidad de interés general.

2. La gestión de personal de las mancomunidades de interés general debe realizarse con estricto cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y suficiencia financiera, respetando los límites de la masa salarial que anualmente pueda prever la legislación correspondiente para las administraciones públicas, aplicándose lo previsto en la Disposición adicional quinta de esta ley.



Artículo 53.- Régimen del personal al servicio de las mancomunidades de interés general.

1. El personal al servicio de las mancomunidades de interés general, para el cumplimiento de sus fines, se regirá con carácter general por lo dispuesto para el personal al servicio de la administración local en la legislación estatal y autonómica que resulte de aplicación y, con carácter específico, en lo dispuesto en esta ley, en sus estatutos y, en su caso, en los reglamentos orgánicos.

2. Este personal prestará sus servicios en el territorio de cualquiera de los municipios asociados, de acuerdo con lo que determinen las relaciones de puestos de trabajo.

3. Las plantillas y relaciones de puestos de trabajo, la oferta de empleo público y la selección de personal de las mancomunidades de interés general se ajustarán a los criterios fijados en la normativa básica estatal.

4. Los estatutos y, en su caso, los reglamentos orgánicos aprobados por la mancomunidad de interés general, deberán contemplar la situación en que quedará su personal en el supuesto de disolución de la misma o, en el caso de separación de algún municipio, de acuerdo con lo que disponga la legislación aplicable.

Artículo 54.- Criterios relativos a los funcionarios con habilitación de carácter estatal.

1. La ocupación efectiva del puesto de funcionario con habilitación de carácter estatal de la mancomunidad de interés general y de los puestos únicos sostenidos en común por varios municipios se efectuará de acuerdo con los procedimientos establecidos normativamente, sin perjuicio de lo previsto en las Disposiciones adicionales séptima y octava.

2. La Administración de la Comunidad de Castilla y León no podrá eximir a las mancomunidades de interés general rurales de la obligación de mantener los correspondientes puestos de funcionarios con habilitación de carácter estatal.

3. En el marco de la legislación básica del Estado, todos los municipios de menos de 1.000 habitantes o que tengan un presupuesto anual inferior a 1.000.000 euros, que se incorporen a una mancomunidad de interés general, deberán sostener en común un puesto único de funcionario con habilitación de carácter estatal con otros municipios colindantes, que en su conjunto superen los límites expuestos, sin perjuicio de lo previsto en la Disposición adicional octava.

Artículo 55.- Personal auxiliar de apoyo al puesto de funcionario con habilitación de carácter estatal sostenido en común por municipios que estén asociados a una mancomunidad de interés general.

En el supuesto de sostenimiento en común del puesto único de funcionario con habilitación de carácter estatal para diversos municipios, derivado de un proceso de reestructuración, que estén asociados a una mancomunidad de interés general, se podrá, de acuerdo con la legislación del estado y en atención a las necesidades del servicio, crear puestos de trabajo de auxiliar de apoyo al puesto de funcionario con habilitación de carácter estatal, que podrá estar sometido a condiciones de movilidad, y que ejercerá funciones de carácter administrativo.



Artículo 56.- La potestad tributaria y el presupuesto de las mancomunidades de interés general.

1. El ejercicio de la potestad tributaria y la aprobación del presupuesto de las mancomunidades de interés general, su ejecución y su liquidación, se regirán por las disposiciones contenidas en la normativa básica estatal y por los principios de estabilidad presupuestaria y suficiencia financiera.

2. El estado de ingresos de la mancomunidad de interés general, respecto a la determinación de su contenido, indicará la distribución de los ingresos entre los municipios asociados, por cada materia, competencia, y función, mediante las correspondientes aportaciones, en los términos previstos en la normativa estatal.

3. El estado de gastos de la mancomunidad de interés general, respecto a la determinación de su contenido, indicará las previsiones necesarias de distribución de los programas de gastos entre los municipios asociados, en atención a cada una de las materias, competencias, y funciones que cada municipio haya asignado a la mancomunidad, de acuerdo con los criterios de reparto previstos en los estatutos, y en los términos dispuestos en la normativa estatal.

Artículo 57.- Aportaciones económicas de los municipios asociados a las mancomunidades de interés general.

1. Los municipios asociados consignarán en sus presupuestos las cantidades precisas, diferenciadas por materias, competencias y funciones, para atender las aportaciones comprometidas con la mancomunidad de interés general a la que pertenezcan, y a tal efecto el funcionario habilitado de carácter estatal, en el ejercicio de sus funciones, informará de ello específicamente con carácter previo a la adopción del acuerdo de aprobación definitiva del presupuesto municipal.

2. Las aportaciones económicas de los municipios asociados se realizarán en la forma y plazos que se determinen en el estatuto de la mancomunidad de interés general.

Estas aportaciones tendrán la consideración a todos los efectos de pagos obligatorios y de carácter preferente, ostentando la mancomunidad de interés general las prerrogativas establecidas legalmente para la hacienda del Estado.

Artículo 58.- Apoyo económico a las mancomunidades de interés general por otras administraciones.

1. La Administración de la Comunidad de Castilla y León y las Diputaciones Provinciales podrán determinar en sus líneas de ayudas el carácter preferente de las mancomunidades de interés general rurales para sus materias, competencias y funciones, llegando incluso a una financiación del cien por cien, o a concederles, en su caso, subvenciones directas.

2. La Administración de la Comunidad de Castilla y León, a través de la Consejería competente en materia de administración local, y de acuerdo con lo que prevean los presupuestos generales de la Comunidad de Castilla y León para cada año, establecerá una línea de cooperación económica local general destinada a las mancomunidades de interés general.



La cooperación económica local que la Administración de la Comunidad de Castilla y León pueda destinar al plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal de las Diputaciones Provinciales, quedará condicionada a que una parte vaya destinada a las mancomunidades de interés general rurales, en los términos y cuantías que se establezca por Orden de la Consejería competente en materia de administración local.

Artículo 59.- Coordinación y garantía de eficiencia en el funcionamiento de las mancomunidades de interés general.

1. La Administración de la Comunidad de Castilla y León coordinará el funcionamiento de las mancomunidades de interés general.

La concesión de ayudas a las mancomunidades de interés general por la Administración de la Comunidad de Castilla y León, o a través del plan de obras de las Diputaciones Provinciales, quedará condicionada al cumplimiento y acreditación de que la gestión, en cada una de sus competencias y funciones, cumplen con los principios de eficiencia, suficiencia financiera y no duplicidad administrativa.

2. El cumplimiento de los principios establecidos en el apartado anterior, se acreditará y evaluará en la forma que se determine mediante Orden de la Consejería competente, pudiendo tomar en consideración también, los criterios y estándares que, de existir, pudiera fijar la legislación básica del Estado para sus evaluaciones.

3. Asimismo, y en atención a lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, y de la necesaria difusión que deben tener, la Administración de la Comunidad de Castilla y León, a través de la Consejería competente en materia de administración local, dará publicidad a cuantos datos sean relevantes para comprobar el cumplimiento de los principios de eficiencia y sostenibilidad financiera.

TÍTULO V

DE LA FUSIÓN DE MUNICIPIOS

Artículo 60.- Régimen de las fusiones de municipios.

1. La creación de nuevos municipios por fusión de otros limítrofes se regirá por lo dispuesto en la legislación básica del Estado, en la Ley de Régimen Local de Castilla y León, y en esta ley.

2. El nuevo municipio resultante sucederá a los municipios fusionados en todos sus derechos, bienes, acciones, aprovechamientos, obligaciones, deudas y cargas.

3. El personal propio de los municipios fusionados pasará, con todos sus derechos y obligaciones, a formar parte de la plantilla del nuevo municipio. La situación de los funcionarios de habilitación de carácter estatal se regulará por sus normas específicas.

4. La capitalidad del nuevo municipio radicará en el núcleo de población que acuerden los municipios fusionados.

El municipio o municipios fusionados en los que no recaiga la capitalidad del municipio resultante podrán constituirse en entidad local menor conforme al artículo 56.1 de la Ley de Régimen Local de Castilla y León, pudiendo tramitarse simultáneamente los procedimientos de fusión de municipios y de constitución de entidad local menor.



Artículo 61.- Fusión de municipios y ordenación del territorio.

1. El nuevo municipio resultante de la fusión de municipios, cuando éstos pertenezcan a distintas unidades básicas de ordenación y servicios del territorio rurales, se integrará en la unidad básica de ordenación y servicios del territorio rural que determine la Junta de Castilla y León, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 6 de esta ley.

2. No perderá la condición de unidad básica de ordenación y servicios del territorio rural aquella que, como consecuencia de una fusión de municipios, deje de cumplir los requisitos previstos en el artículo 4 de esta ley.

3. Si por la fusión de municipios, la población de derecho del municipio resultante supera los 20.000 habitantes, éste pasará a ser unidad básica de ordenación y servicios del territorio urbana.

4. Cuando el municipio resultante de una fusión de municipios afecte a la delimitación de un área funcional estable o estratégica, la Junta de Castilla y León determinará la oportuna modificación de las mismas.

Artículo 62.- Fusión de municipios de distintas mancomunidades de interés general.

1. Cuando los municipios afectados por una fusión pertenecieran a mancomunidades de interés general distintas, el municipio resultante deberá renovar su voluntad de asociación.

2. Los estatutos de las mancomunidades de interés general deberán adaptarse a la situación del nuevo municipio resultante tras la fusión, en relación, entre otros, a la composición de sus órganos de gobierno, situación competencial del municipio conforme a su nuevo tramo poblacional, cesión de bienes y personal, y aportaciones del nuevo municipio.

En tanto no se celebre un proceso electoral, formarán parte de los órganos de gobierno de las mancomunidades de interés general los miembros de la comisión gestora del nuevo municipio.

Artículo 63.- Fomento de las fusiones de municipios.

1. La Administración de la Comunidad de Castilla y León fomentará, mediante las ayudas técnicas y económicas previstas en el artículo 18 de la Ley de Régimen Local de Castilla y León, la fusión de municipios limítrofes.

2. Además de las ayudas técnicas y económicas previstas en el apartado anterior, los municipios interesados podrán ser beneficiarios de una ayuda económica previa a la fusión, a conceder por la Consejería competente en materia de administración local.

Para ser beneficiario de la citada ayuda, con carácter previo al inicio de procedimiento de fusión, los ayuntamientos interesados deberán acordar la elaboración conjunta de un plan director, que se aprobará por mayoría absoluta de los ayuntamientos, no podrá tener más de dos años de duración, y tendrá por objeto la planificación y programación del proceso y la preparación de la documentación de la fusión.



DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Enclave de Treviño.

Los municipios del enclave de Treviño constituyen una unidad básica de ordenación y servicios del territorio rural.

Dichos municipios se integrarán en el área funcional estable que se constituya en torno a la unidad básica de ordenación y servicios del territorio urbana de Miranda de Ebro.

Los municipios del enclave de Treviño podrán asociarse con los municipios más próximos de Castilla y León para constituir una mancomunidad de interés general, de acuerdo con lo previsto en esta ley.

Segunda. La Comarca de El Bierzo.

En la Comarca de El Bierzo se delimitarán unidades básicas de ordenación y servicios en el territorio de acuerdo con lo establecido en esta ley. En el proceso de delimitación del mapa de unidades básicas, se oirá también al Consejo Comarcal de El Bierzo.

Tercera. Integración de los servicios de transporte público de viajeros por carretera de usos especial y de usos general.

Para conseguir en el transporte público de viajeros la efectiva eficiencia y coordinación interadministrativa de los servicios autonómicos, la Administración de la Comunidad de Castilla y León podrá establecer, en las condiciones y zonas geográficas que justificadamente se determinen, la prestación conjunta de los servicios de transporte público escolar obligatorio y los de transporte de uso general de viajeros por carretera.

Cuarta. Integración de centros residenciales de las corporaciones locales.

1. La Administración de la Comunidad de Castilla y León podrá integrar en su red de centros residenciales de titularidad pública, las residencias de personas mayores y los centros de personas con discapacidad de titularidad de las Diputaciones Provinciales, en el marco de la planificación regional y de los principios de estabilidad y suficiencia financiera, en los términos y condiciones que se establezcan en los correspondientes acuerdos que se suscriban, y para los centros que oficialmente estén calificados como tales.

De igual forma, la Administración de la Comunidad de Castilla y León podrá integrar en su red de centros residenciales de titularidad pública, las residencias de personas mayores de titularidad de los municipios, en el marco, y en los términos y condiciones, expuestos en el párrafo anterior.

2. La constitución de las correspondientes comisiones mixtas de traspaso se efectuará progresivamente a partir de la entrada en vigor de esta ley.

El personal de estos centros asignados directa y cualificadamente a la prestación de estos servicios se integrará en la Administración de la Comunidad Autónoma, siéndole de aplicación la legislación de la función pública autonómica.

Respecto al resto de medios personales que no se ajusten a la normativa autonómica o que la correspondiente comisión mixta de traspaso no valore como necesarios, las entidades locales realizarán un plan de reubicación en sus estructuras y de formación de dicho personal.



En todo lo que sea compatible por la naturaleza de los servicios a integrar, será aplicable la Ley 8/2009, de 16 de junio, de transferencia de competencias entre la Comunidad Autónoma y las entidades locales de Castilla y León.

Quinta. Limitación presupuestaria en los gastos del personal de las mancomunidades de interés general.

1. Como requisito para la declaración de una mancomunidad como de interés general, en sus estatutos deberá garantizarse que, en ningún caso, se dotará de personal eventual o de confianza, o de personal directivo.

2. A los mismos efectos del apartado anterior, deberá constar en el expediente el compromiso que garantice que la pertenencia de cualquiera de los municipios a la misma no podrá suponer para dichos municipios asociados, durante los cinco años siguientes a la declaración, gastos de personal propio y gastos como aportación para el personal de la mancomunidad superiores a los anteriores al ingreso en la misma.

En esa valoración se incluirán los gastos de personal propio y, en su caso, las aportaciones para sufragar los gastos de personal de la anterior mancomunidad si perteneciera a alguna.

En todo caso, no se considerará un aumento de la cantidad global los futuros incrementos retributivos de los funcionarios que pudiera establecer la normativa básica del Estado.

3. A los mismos efectos del apartado uno de esta Disposición, durante los tres años siguientes a la declaración de las mancomunidades de interés general, y como garantía de una correcta valoración de las necesidades de personal de cada mancomunidad, se requerirá en el expediente su compromiso de no dotarse de personal propio mediante oferta de empleo, pudiendo sólo acudir excepcionalmente, de ser preciso, a la contratación laboral temporal.

4. La Orden prevista en el artículo 59.2 de esta ley concretará los medios de seguimiento y control para verificar el cumplimiento de los compromisos establecidos en los apartados anteriores.

Sexta. Mancomunidades de interés general rurales de municipios que estén en el entorno de un municipio de más de 20.000 habitantes.

Excepcionalmente, si una unidad básica de ordenación y servicios del territorio rural circunvala en todo o en gran parte un municipio mayor de 20.000 habitantes, los municipios que pertenezcan a la misma podrán asociarse a la mancomunidad de interés general rural colindante al municipio respectivo.

Séptima. Primera ocupación en destino definitivo del puesto de funcionario con habilitación de carácter estatal de la mancomunidad de interés general.

1. Los puestos de funcionarios con habilitación de carácter estatal de las mancomunidades de interés general se establecerán mediante la modificación de los correspondientes puestos de las anteriores mancomunidades modificadas o disueltas, con las que sustancialmente coincidan, o, en su defecto, mediante la modificación de alguno de los correspondientes puestos de los municipios que las integran.



A estos efectos, se entiende que una mancomunidad de interés general coincide sustancialmente con una mancomunidad anterior cuando la mayoría de los municipios o la mayoría de los ciudadanos de ésta se han incorporado a aquélla.

2. La primera ocupación en destino definitivo del puesto de la mancomunidad de interés general corresponderá al funcionario de carrera que tuviera con tal carácter el puesto de la anterior mancomunidad modificada o extinguida a fecha 31 de diciembre de 2012.

En su defecto, para la primera ocupación en destino definitivo se efectuará un concurso interno restringido a los funcionarios de carrera con destino definitivo en los municipios pertenecientes a dicha mancomunidad de interés general, que se convocará y resolverá por la Consejería competente en materia de administración local, modificándose para el adjudicatario su puesto municipal que pasará a ser el puesto de la mancomunidad de interés general.

Octava. Eficacia en el sostenimiento en común de un puesto único y primera ocupación en destino definitivo.

1. El sostenimiento en común de un nuevo puesto único del funcionario con habilitación de carácter estatal, en los municipios de menos de 1.000 habitantes o con un presupuesto anual inferior a 1.000.000 euros que se incorporen a una mancomunidad de interés general rural, se efectuará mediante la correspondiente modificación de los actuales puestos de trabajo.

2. El órgano competente para acordar la modificación iniciará el expediente de oficio, dando audiencia a los municipios afectados y solicitándoles una propuesta de estatutos de la asociación para el sostenimiento en común del puesto único, debiendo comunicar su resolución, una vez adoptada, al Ministerio competente en materia de administración local.

3. La eficacia de los acuerdos adoptados para el sostenimiento en común de un puesto único quedará demorada al momento en el que no se vea afectado el derecho al puesto definitivo de ninguno de los funcionarios de carrera de los anteriores puestos afectados, y así se hará constar por el órgano competente en la resolución de constitución, en la que se indicará que el último puesto cubierto en destino definitivo será el nuevo puesto sostenido en común, quedando los demás extinguidos.

Para los anteriores puestos, se propondrá su no inclusión en concursos de traslados, por estar incursos en un proceso de modificación de la plaza, hasta que el proceso de reestructuración se haya completado.

Se establece a favor del funcionario de carrera en destino definitivo la reserva de ocupación del puesto de funcionario con habilitación de carácter estatal sujeto a modificación, hasta que su puesto quede vacante.

Cuando en el conjunto de plazas sólo quede un funcionario de carrera con destino definitivo, se le podrá atribuir el destino definitivo en la plaza única.

Novena. Mancomunidades de aguas.

Las mancomunidades que tengan como fin específico la gestión de aguas podrán contar con líneas de ayuda de carácter preferente de la consejería competente por razón de la materia, previo informe de la Consejería competente en materia de administración local.



DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta ley.

Específicamente, se deroga la Disposición adicional tercera de la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Modificación de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León.

1. Se modifica el apartado 4 del artículo 16 de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León, que queda redactado de la siguiente forma:

“4. Podrá iniciarse por los vecinos el procedimiento cuando se trate de los supuestos contemplados en los artículos 10, 11 y 15 de esta ley, mediante solicitud formulada por la mayoría de los residentes en la parte o partes que hayan de segregarse, o de cada uno de los municipios a fusionarse.”

2. Se modifica del artículo 18 de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León, que queda redactado de la siguiente forma:

“Artículo 18.

Para el fomento de las fusiones e incorporaciones de municipios con población inferior a 20.000 residentes, se establecen las siguientes medidas y beneficios, que serán desarrolladas reglamentariamente:

1. Se creará un fondo o dotación destinado a acciones directas de fomento y a la concesión de ayudas para una mejor prestación de servicios de los municipios resultantes

2. Se fijarán preferencias en su favor y a los mismos fines en los regímenes generales de ayudas a municipios que apruebe la Junta de Castilla y León. Tendrán prioridad las comunicaciones entre los núcleos pertenecientes a los municipios fusionados o incorporados y la capitalidad municipio resultante, y aquellas necesidades o servicios derivados directamente de la alteración.

La cooperación económica local que la Administración de la Comunidad de Castilla y León destine al plan de obras de las Diputaciones Provinciales, quedará condicionada a que una parte vaya destinada al nuevo municipio surgido de una fusión, en los términos y cuantías que se establezca por Orden de la Consejería competente en materia de administración local.

3. Para facilitar la integración y la eficaz prestación de los servicios municipales, las Diputaciones Provinciales prestarán a los municipios resultantes, asistencia y asesoramiento adecuados y establecerán en su favor, prioridades y preferencias en los planes provinciales de cooperación.



4. Se promoverán los convenios y acuerdos oportunos para una eficaz coordinación de las anteriores medidas de fomento con las que pueda establecer el Estado, conforme al artículo 13.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

Asimismo, se promoverán convenios y acuerdos de cooperación con los municipios para la gestión de su patrimonio.”

3. Se modifica el artículo 32 de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León, que queda redactado de la siguiente forma:

“Artículo 32.

1. Aquellas mancomunidades cuyo ámbito territorial concuerde sustancialmente con espacios de ordenación territorial para la prestación de servicios estatales, autonómicos o provinciales podrán ser declaradas de interés general.

Legalmente se establecerá el régimen jurídico de las mancomunidades que se califiquen de interés general y los beneficios derivados de tal declaración.

2. Reglamentariamente se establecerán las competencias y funciones de estas mancomunidades.

En el ámbito rural, la cartera de servicios de las mancomunidades de interés general deberá ser común y homogénea.

3. Las mancomunidades de interés general podrán tener líneas preferentes de financiación.

La Administración de la Comunidad de Castilla y León, a través de la Consejería competente en materia de administración local, establecerá una línea específica en la cooperación económica general destinada a las mancomunidades de interés general, en los términos que por Orden de la Consejería se prevean.

4. Los órganos de gobierno de las mancomunidades de interés general deberán reproducir en su composición los resultados electorales obtenidos en los municipios mancomunados.

5. La modificación de los estatutos que tengan por objeto la constitución de una mancomunidad que tenga por finalidad ser declarada de interés general será considerada como una modificación sustancial.”

4. Se modifica el apartado 2 del artículo 36 de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León, que queda redactado de la siguiente forma:

“2. Adoptados los acuerdos anteriores, el Presidente de la Comisión Promotora remitirá a la Consejería competente en materia de administración local una copia del expediente y de los Estatutos de la mancomunidad para su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Constituidos los órganos de gobierno de la mancomunidad, será necesaria la solicitud del presidente para la inscripción en el Registro de Entidades Locales, que deberá de producirse en el plazo previsto en los estatutos y no podrá ser superior a un mes, momento a partir del cual será efectiva su constitución, de la que se dará traslado a la Administración del Estado”



5. Se modifica el apartado 4 del artículo 38 de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen local de Castilla y León, que queda redactado de la siguiente forma:

“4. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, tendrán carácter sustancial las modificaciones de los Estatutos que afecten a su declaración como mancomunidad de interés general, a la representatividad que los ayuntamientos tengan en los órganos de gobierno de la Mancomunidad, a los criterios para las aportaciones financieras, y aquellas otras que los propios Estatutos determinen.”

6. Se modifica el artículo 69 de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León, que queda redactado de la siguiente forma:

“Artículo 69.

1. Cuando las Entidades Locales Menores realicen obras o presten servicios por delegación del municipio, el coste de unas y otros que no puedan financiarse con precios públicos o tasas y contribuciones especiales será soportado por aquéllas y por los municipios de que dependan en los términos que fije el acuerdo de delegación.

2. La Administración de la Comunidad de Castilla y León y las respectivas Diputaciones Provinciales promoverán la aplicación por el municipio de los principios de cohesión territorial y solidaridad de la comunidad municipal, en el marco del artículo 43.3 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León.

De igual forma, promoverán la aplicación por la entidad local menor de estos mismos principios hacia la comunidad municipal.

A tal fin, las citadas administraciones garantizarán que, para recibir sus ayudas y subvenciones, los municipios y entidades locales menores receptoras respetan dichos principios, en la forma que se determine normativamente.

A los efectos de esta ley, se entiende por comunidad municipal la integrada por el núcleo de población capital del municipio, así como, en su caso, por la entidad o entidades locales menores que el municipio pudiera tener, y los anejos separados de la cabecera que pudieran existir.”

7. Se añade un apartado 4 al artículo 83 de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León, que queda redactado de la siguiente forma:

“4. La Administración de la Comunidad de Castilla y León podrá encomendar la realización de actividades de carácter material, técnico o de gestión de servicios propios a las entidades locales, acompañando la dotación o medios económicos previstos para llevarla a cabo.

Cuando la encomienda de gestión se lleve a cabo en las Diputaciones Provinciales o en los municipios mayores de 20.000 habitantes, deberá realizarse conjuntamente a todos ellos. No obstante, cuando la naturaleza o características de la actividad así lo exija, la encomienda se podrá limitar a la entidad local afectada.”

8. Se modifica el artículo 100 de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León, que queda redactado de la siguiente forma.

“1. Sin perjuicio de las competencias del Consejo de Cooperación Local, por Orden de la Consejería competente en materia de administración local, con el fin de asegurar la eficacia y eficiencia de la políticas públicas en cada territorio, podrán crearse órganos



colegiados en el ámbito provincial para el estudio y la colaboración entre las delegaciones territoriales de la Junta de Castilla y León y las respectivas entidades locales de la provincia.

2. Cuando la naturaleza de la materia lo aconseje, por Orden de la Consejería competente en materia de administración local podrán crearse Comisiones Sectoriales de Colaboración para asesorar e informar sobre las materias de que se trate, en el ámbito de la Comunidad Autónoma.

3. En estas Comisiones estarán representadas las Entidades Locales afectadas, pudiendo participar, asimismo, la Administración General del Estado.”

Segunda. Modificación de la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León.

Se modifica el apartado 1 del artículo 14 de la 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León, que quedan redactados de la siguiente forma:

“1. Las Directrices de Ordenación de ámbito subregional tendrán como objetivo la planificación de las áreas de la Comunidad que precisen una consideración conjunta y coordinada de sus problemas territoriales. A tal efecto, serán ámbitos prioritarios los definidos en la legislación sobre ordenación, servicios y gobierno del territorio y, en especial, las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio y las áreas funcionales estables.”

Tercera. Modificación de la Ley 3/2008, de 17 de junio, de aprobación de directrices esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León.

Se modifican los apartados 1, 2 y 3 del punto 2º del Anexo de la Ley 3/2008, de 17 de junio, de aprobación de directrices esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León, que quedan redactados de la siguiente forma:

“2.1. Las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio como ámbito funcional básico

Las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio son la referencia espacial y parámetro básico para el desarrollo de la ordenación del territorio de Castilla y León.

El mapa que concrete las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio formará parte de las Directrices complementarias, y será base para su elaboración.

2.2. Red de centros urbanos y rurales

El conjunto de ciudades, villas y pueblos de la Comunidad configura el sistema urbano y rural de Castilla y León, una red articulada de centros que estructuran las relaciones territoriales y sus flujos, formando una unidad funcional interdependiente. En dicho sistema:

a) Se consideran centros urbanos de referencia, los municipios con población superior a 20.000 habitantes.

b) Se consideran centros rurales de referencia los municipios con población superior a 5.000 e igual o inferior a 20.000 habitantes.



c) Asimismo, se consideran centros rurales de referencia, los municipios con población superior a 1.000 habitantes que tengan además la consideración de municipios prestadores de servicios generales.

Estos centros configuran los nodos de la red de centros urbanos y rurales y se considerarán centros de referencia para la dotación de equipamientos, la prestación de servicios y las acciones de innovación en el territorio.

2.3. Otros ámbitos funcionales

El territorio de Castilla y León se vertebra por la unión de sus nueve provincias, realidades históricas que constituyen el ámbito de actuación de las Diputaciones, la referencia para la organización espacial de la Administración del Estado y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, y un ámbito funcional para la ordenación del territorio de Castilla y León, ya que, tanto su dimensión espacial como su peso demográfico son adecuados para organizar servicios de nivel superior y constituir con eficacia una referencia espacial del gobierno del territorio.

Podrán constituirse temporalmente áreas funcionales estratégicas, como ámbitos funcionales intermedios entre la provincia y las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio, de acuerdo con su instrumento de ordenación y planeamiento.

Las ciudades con más de 20.000 habitantes y los núcleos de su entorno tienen relaciones funcionales habituales, que constituyen áreas funcionales estables, ámbito idóneo para la aplicación de instrumentos de ordenación y planeamiento.”

Cuarta. Modificación de la Ley 8/2009, de 16 de junio, de transferencia de competencias entre la Comunidad Autónoma y las entidades locales de Castilla y León.

Se modifica la Disposición adicional tercera de la Ley 8/2009, de 16 de junio, de transferencia de competencias entre la Comunidad Autónoma y las entidades locales de Castilla y León, que queda redactada de la siguiente forma:

“Disposición adicional tercera: Los plazos para la constitución de las comisiones mixtas de negociación de los traspasos, se determinarán de forma progresiva, a propuesta del Consejo de Cooperación Local de Castilla y León.”

Quinta. Modificación de la Ley 8/2010, de 30 de agosto, de Ordenación del Sistema de Salud de Castilla y León.

1. Se modifica el apartado 1 del artículo 13 de la Ley 8/2010, de 30 de agosto, de de Ordenación del Sistema de Salud de Castilla y León, que queda redactado de la siguiente forma:

“1. El Sistema Público de Salud de Castilla y León se organiza territorialmente en Áreas de Salud, Zonas Básicas de Salud, Demarcaciones Sanitarias y en aquellas otras divisiones territoriales que, en función de lo establecido en el artículo 17 de la presente Ley, pudieran crearse. El conjunto de estas organizaciones territoriales se denomina mapa sanitario de Castilla y León que es el instrumento esencial para la ordenación, planificación y gestión del Sistema Público de Salud de la Comunidad, y que deberá adecuarse, respecto al ámbito rural, al mapa de unidades básicas de ordenación y servicios del territorio rurales, previstas en la normativa de ordenación del territorio.”



2. Se suprime el apartado 4 del artículo 15, reenumerándose los posteriores apartados, y se añade un párrafo segundo al apartado 1 del artículo 15 de la Ley 8/2010, de 30 de agosto, de Ordenación del sistema de salud de Castilla y León, redactado de la siguiente forma:

“Las Zonas Básicas de Salud, en el ámbito rural, deberán establecerse respetando las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio rurales, previstas en la normativa de ordenación del territorio.”

Sexta. Modificación de la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de servicios sociales de Castilla y León.

1. Se suprime el apartado 4 del artículo 25, y se modifica el apartado 3 del artículo 25 de la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de servicios sociales de Castilla y León, que queda redactado de la siguiente forma:

“3. Cada Zona de Acción Social se corresponderá con una demarcación, que en el medio rural, estará constituida por una o varias unidades básicas de ordenación y servicios del territorio rurales, previstas en la normativa de ordenación del territorio. En el medio urbano, se corresponderá con una demarcación constituida por un módulo de población de 20.000 habitantes.”

2. Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 28 de la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de servicios sociales de Castilla y León, que quedan redactados de la siguiente forma:

“2. El Mapa de Servicios Sociales de Castilla y León recogerá las áreas y zonas, así como las divisiones territoriales cuya creación se justifique por razón de necesidades específicas, determinando las prestaciones a desarrollar en cada ámbito.

En el medio rural, dicho mapa deberá diseñarse, en todo caso, conforme a las Unidades Básicas de Ordenación y Servicios del Territorio rurales, previstas en la normativa de ordenación del territorio.”

“3. El Mapa de Servicios Sociales de Castilla y León podrá establecer índices correctores para la delimitación de Zonas de Acción Social que garanticen una distribución equitativa, así como acordar, con carácter excepcional y de forma justificada, la creación, modificación, agrupación o supresión de aquellas, siempre que, en el medio rural, se respeten las Unidades Básicas de Ordenación y Servicios del Territorio rurales.”

3. Se modifica la letra d) del artículo 48 de la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de servicios sociales de Castilla y León, que queda redactada de la siguiente forma:

“d) La propuesta para la determinación de las zonas y áreas de acción social, así como las estructuras de tercer nivel que pudieran corresponderles al amparo de esta Ley, respetando, en todo caso, las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio rurales, previstas en la normativa de ordenación del territorio.”

Séptima. Adaptación progresiva de los servicios autonómicos rurales al mapa de unidades básicas de ordenación y servicios rurales.

1. Los servicios autonómicos prestados en el ámbito rural que tengan una zonificación territorial específica inferior a la provincia, deberán adaptarse de forma progresiva al mapa de unidades básicas de ordenación y servicios del territorio.



2. La adaptación de la zonificación deberá producirse en el plazo de tres años desde la aprobación del mapa de unidades básicas de ordenación y servicios del territorio.

Octava. Mapa concesional de transporte interurbano de viajeros por carretera de Castilla y León.

La adaptación del diseño del futuro mapa concesional del transporte interurbano de viajeros por carretera de Castilla y León a las previsiones de esta ley, se llevará a cabo una vez finalizada la vigencia de las actuales concesiones administrativas y autorizaciones especiales de servicios de transporte público regular de uso general de viajeros por carretera.

Las nuevas rutas de transporte que se diseñen se acomodarán a las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio previstas en la presente ley.

La nueva ordenación que afecte al ámbito rural deberá realizarse, de forma prioritaria utilizando el sistema de gestión de Transporte a la Demanda registrado por la Junta de Castilla y León.

Novena. Modificaciones y simplificación normativas para evitar duplicidades administrativas.

La Administración de la Comunidad de Castilla y León deberá, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, revisar la normativa sectorial y, en su caso, modificar o proponer la modificación de la misma, bajo el principio de la simplificación del ordenamiento jurídico autonómico, estableciendo de modo preciso las atribuciones de competencias y funciones que corresponden a la propia administración autonómica y a los entes locales, con el fin de evitar duplicidades, tanto en la prestación de servicios como en la adopción de medidas de fomento.

Décima. Implantación de la Administración electrónica en el ámbito local.

1. Los municipios de Castilla y León de más de 20.000 habitantes y las Diputaciones Provinciales adoptarán cuantas medidas sean necesarias para la efectividad de los compromisos establecidos en el artículo 14.2 y en el Capítulo II del Título III, a través de las sedes electrónicas o páginas web de los municipios o mediante otras técnicas de información y comunicación.

2. Las Diputaciones Provinciales de Castilla y León colaborarán con los municipios menores de 20.000 habitantes, que no tengan capacidad técnica y organizativa suficiente para hacer efectivos los compromisos establecidos en el apartado anterior, fijando en sus programas y calendarios, en su caso, las previsiones de dicha colaboración.

Decimoprimera. Reestructuración de los puestos de trabajo de funcionarios con habilitación con carácter estatal sostenidos en común.

En el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, se deberán reestructurar los actuales puestos de trabajo de funcionarios con habilitación con carácter estatal sostenidos en común por varios municipios, de forma que los nuevos puestos atiendan a municipios con una población mínima conjunta de 500 habitantes o tengan un presupuesto anual global superior a 500.000 euros.

El procedimiento a tales efectos, será el previsto en la Disposición adicional séptima.



Decimosegunda. Entidades Locales Menores.

1. En el marco de la legislación básica del Estado, reglamentariamente se determinarán las especialidades que puedan corresponder en el régimen de tesorería, contabilidad y fiscalización respecto a determinadas entidades locales menores, en función de su tamaño o presupuesto.

2. Los municipios y sus entidades locales menores adecuarán sus relaciones a los principios de cohesión territorial y solidaridad dentro del municipio dentro de las siguientes reglas:

a) Se podrán establecer convenios entre el municipio y cada entidad local menor o, para los anejos, se podrán realizar acuerdos plenarios de compromiso de gasto durante cada legislatura, para promover la aplicación de dichos principios, en los términos previstos en la Ley de Régimen Local de Castilla y León.

En el supuesto de convenios, se concretarán las fórmulas de revisión y actualización de las aportaciones o participaciones.

Para garantizar la reciproca solidaridad, cuando una de las partes no libre el importe de las aportaciones o participaciones en los plazos fijados en el convenio o acuerdo plenario de compromiso de gasto, la otra parte, previa audiencia a las restantes afectadas, podrá solicitar a la Comunidad Autónoma o Diputación Provincial la retención de dicho importe en los pagos que por cualquier concepto éstas hayan de realizar a la primera.

b) A falta del convenio o del acuerdo plenario municipal previsto en el apartado anterior, la Administración de la Comunidad de Castilla y León y las respectivas Diputaciones Provinciales podrán aplicar a los recursos económicos susceptibles de ser aportados a la comunidad municipal, el destino finalista que proceda. Reglamentariamente se determinarán los criterios para la cuantificación de dichas aportaciones.

c) La obligación de cohesión territorial y solidaridad desaparecerá en el supuesto de supresión de una entidad local menor, en la forma y con los requisitos previstos en la legislación básica de régimen local, sin perjuicio de que se especifique el destino de sus bienes, y la atribución de su titularidad y aprovechamientos al respectivo municipio en el Acuerdo de la Junta de Castilla y León por el que se suprima.

Decimotercera. Participación de las entidades locales en los ingresos propios de la Comunidad de Castilla y León.

La Junta de Castilla y León aprobará un Proyecto de Ley que regule la forma efectiva de materializar la participación de las entidades locales en los ingresos propios de la Comunidad de Castilla y León, de acuerdo con el artículo 55.3 del Estatuto de Autonomía, en los tres meses siguientes a la entrada en vigor de esta Ley, siempre que previamente se haya modificado la legislación básica sobre régimen local en relación al ámbito competencial local, o, en caso contrario, dentro de los tres meses siguientes a dicha modificación de la legislación básica estatal.

Decimocuarta. Habilitación normativa.

1. Se habilita a la Junta de Castilla y León y a la consejería competente, para dictar cuántas disposiciones sean precisas para el desarrollo y ejecución de lo previsto en la presente ley.



2. Por la Consejería competente en materia de administración local se podrán establecer modelos-tipo de estatutos, acuerdos locales, certificados, documentos de acreditación y evaluación de eficiencia u otros documentos en relación con las mancomunidades de interés general, para facilitar una actuación administrativa unitaria y ágil.

Decimoquinta. Entrada en vigor.

La presente ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Valladolid, 4 de abril de 2013.

El Presidente de la Junta de Castilla y León
Juan Vicente Herrera Campo

ANEXO

A los efectos de esta Ley se entiende por:

1. Comunidad municipal. La comunidad integrada por el núcleo de población capital del municipio, así como, en su caso, por la entidad o entidades locales menores que el municipio pudiera tener, y los anejos separados de la cabecera que pudieran existir.

2. Unidades básicas de ordenación y servicios del territorio. Son espacios funcionales delimitados geográficamente, que constituyen la referencia espacial y el parámetro básico para el desarrollo de la ordenación del territorio.

3. Unidades básicas de ordenación y servicios del territorio rurales. Son los espacios que abarcan términos de municipios iguales o menores de 20.000 habitantes.

4. Unidades básicas de ordenación y servicios del territorio urbanos. Son los espacios que abarcan el término de cada uno de los municipios de más de 20.000 habitantes.

5. Mapa de unidades básicas de ordenación y servicios del territorio. Constituye la expresión gráfica que comprende el conjunto de unidades básicas de ordenación y servicios del territorio rurales y urbanas, incluyendo el conjunto de términos de los municipios que integran cada una de ellas.

6. Áreas funcionales. Son espacios funcionales delimitados geográficamente, iguales o mayores que las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio y menores que las provincias, para el desarrollo de la ordenación del territorio y la aplicación de sus instrumentos y herramientas de planificación y gestión.

7. Áreas funcionales estables. Son los espacios integrados por cada unidad básica de ordenación y servicios urbanos y los municipios de su entorno y alfoz, con los que mantiene relaciones permanentes que precisan una planificación conjunta.

8. Áreas funcionales estratégicas. Son los espacios integrados por una unidad básica de ordenación y servicios del territorio o por varias contiguas, para el impulso, durante un tiempo determinado, de programas de desarrollo en aquellas zonas necesitadas de una especial dinamización o afectadas por circunstancias especiales o catastróficas.



9. Materia. Primera distribución funcional y objetiva por sectores de actividad diferenciados sobre los que existe una intervención pública.

10. Competencia. Segunda distribución funcional y objetiva, referida a los diferentes ámbitos de actuación de las administraciones públicas en cada materia, para la satisfacción social de los intereses y necesidades individuales o colectivas.

11. Función. Tercera distribución funcional y objetiva, referida al conjunto de servicios, actividades y tareas precisas para el ejercicio de cada competencia.

12. Mancomunidades de interés general. Son una clase de mancomunidad, entidad local resultante del ejercicio del derecho de los municipios a asociarse voluntariamente con otros para la ejecución en común de obras y servicios determinados de su competencia, que se podrá declarar cuando su ámbito territorial concuerde sustancialmente con una unidad básica de ordenación y servicios en el territorio o varias contiguas.

13. Mancomunidades de interés general rurales. Son aquellas mancomunidades de interés general cuyo ámbito territorial coincida sustancialmente con una o varias unidades básicas de ordenación y servicios del territorio rurales, y que se doten de una cartera de competencias y funciones locales comunes y homogéneas.

14. Mancomunidades de interés general urbanas. Son aquellas mancomunidades de interés general surgidas de la asociación voluntaria entre municipios con población superior a 20.000 habitantes y los municipios de su entorno o alfoz, y que se doten de las competencias y funciones locales que acuerden.

15. Consorcios provinciales de servicios generales. Son una clase de consorcio, entidad local resultante del derecho de las entidades locales a cooperar voluntariamente, para la realización de actuaciones conjuntas, la coordinación de actividades y la consecución de fines de interés común, que se podrán constituir entre las mancomunidades de interés general, y excepcionalmente los municipios, de la misma provincia, y las Diputaciones Provinciales, adscribiéndose a estas últimas.



4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

450. Interpelaciones

I/000131-01

Interpelación formulada a la Junta de Castilla y León por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a política general en materia telecomunicaciones.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de abril de 2013, ha admitido a trámite la Interpelación, I/000131, formulada a la Junta de Castilla y León por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a política general en materia telecomunicaciones.

Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de abril de 2013.

LA SECRETARIA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

LA PRESIDENTA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN,
Fdo.: María Josefa García Cirac

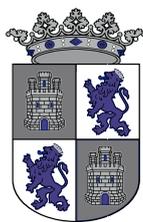
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente INTERPELACIÓN a la Junta de Castilla y León:

Política general de la Junta de Castilla y León en materia de telecomunicaciones.

Valladolid, 20 de marzo de 2013.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Óscar López Águeda



4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

450. Interpelaciones

I/000132-01

Interpelación formulada a la Junta de Castilla y León por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a política general en materia de calidad y sostenibilidad ambiental.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de abril de 2013, ha admitido a trámite la Interpelación, I/000132, formulada a la Junta de Castilla y León por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a política general en materia de calidad y sostenibilidad ambiental.

Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de abril de 2013.

LA SECRETARIA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

LA PRESIDENTA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN,
Fdo.: María Josefa García Cirac

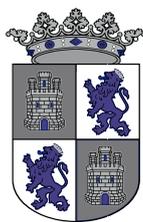
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente INTERPELACIÓN a la Junta de Castilla y León:

Política general de la Junta de Castilla y León en materia de calidad y sostenibilidad ambiental.

Valladolid, 20 de marzo de 2013.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Óscar López Águeda



4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

450. Interpelaciones

I/000133-01

Interpelación formulada a la Junta de Castilla y León por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a política general en materia de juventud.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de abril de 2013, ha admitido a trámite la Interpelación, I/000133, formulada a la Junta de Castilla y León por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a política general en materia de juventud.

Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de abril de 2013.

LA SECRETARIA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

LA PRESIDENTA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente INTERPELACIÓN a la Junta de Castilla y León:

Política general de la Junta de Castilla y León en materia de juventud.

Valladolid, 20 de marzo de 2013.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Óscar López Águeda



4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

450. Interpelaciones

I/000134-01

Interpelación formulada a la Junta de Castilla y León por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a política general en materia de deporte.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de abril de 2013, ha admitido a trámite la Interpelación, I/000134, formulada a la Junta de Castilla y León por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a política general en materia de deporte.

Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de abril de 2013.

LA SECRETARIA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

LA PRESIDENTA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente INTERPELACIÓN a la Junta de Castilla y León:

Política general de la Junta de Castilla y León en materia de deporte.

Valladolid, 17 de abril de 2013.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Óscar López Águeda



4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

451. Mociones

M/000021-01

Moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a política general en materia de agricultura, consecuencia de la Interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria de 16 de abril de 2013.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de abril de 2013, ha admitido a trámite la Moción, M/000021, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a política general en materia de agricultura, consecuencia de la Interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria de 16 de abril de 2013.

De conformidad con el artículo 154 del Reglamento podrán presentarse enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dicha Moción haya de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de abril de 2013.

LA SECRETARIA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

LA PRESIDENTA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el ARTÍCULO 154 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente MOCIÓN derivada de la Interpelación I-000021 relativa a "Política general en materia de agricultura":

ANTECEDENTES

Desde que se presentara la propuesta legislativa sobre reforma de la PAC en el horizonte 2020, largo y difícil ha sido el proceso de reforma en sus dos vertientes, tanto desde las llamadas perspectivas financieras como de las cuestiones de contenido.

El sector agrario en Castilla y León supone el 5 % del Valor Añadido Bruto, duplicando el valor nacional y cuadruplicando la media de la Unión Europea, si además consideramos su sector asociado, el industrial alimentario, esta participación se eleva al 10 % del V.A.B. regional.

A todo esto hay que unir el papel que el sector agrario realiza como gestor de la práctica totalidad del territorio de la región, contribuyendo al mantenimiento y mejora del medio ambiente.



Desde el comienzo de esta última reforma desde Castilla y León todos los grupos parlamentarios así como el conjunto del sector en nuestra Comunidad Autónoma hemos tenido muy presente que apostaríamos de forma unida por una PAC Fuerte que contribuyera a los objetivos de la Europa 2020 y que esté asentada en sus tres instrumentos básicos: apoyo a las rentas, gestión de los mercados y desarrollo rural, esta posición común se materializó de diversas formas, tanto en sede parlamentaria como con acuerdos con el sector.

Por primera vez la Eurocámara ha jugado un papel decisivo colegislando en la reforma de la PAC, donde se ha puesto de manifiesto que la labor del Parlamento Europeo ha sido muy importante para dejar claro que la agricultura es muy diversa en la UE y que hay que tener en cuenta las especificidades de cada territorio.

Entramos en este momento en la recta final de la reforma, con el desarrollo de los denominados "trílogos", diálogo a tres bandas entre el Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo y que permitirán la búsqueda de acuerdos a la hora de introducir modificaciones en los reglamentos, algo anteriormente imposible ya que la Comisión no estaba condicionada a introducir correcciones de aquello que ya había presentado inicialmente.

El Consejo ha dado en esta ocasión más flexibilidad a los estados y por eso es necesaria una mayor concreción por parte del Gobierno de España, pues la verdadera reforma de la PAC comienza a negociarse ahora; esto afecta sin duda a nuestra Comunidad Autónoma, pues comenzará a concretarse el modelo de aplicación regional o nacional.

Por todo ello, con el objetivo de reforzar la posición negociadora del Gobierno de España y de renovar los acuerdos obtenidos por todos los grupos políticos en las Cortes de Castilla y León, así como de actualizar su contenido para lograr que los intereses de nuestro país, y por tanto, del sector agrario en Castilla y León, sean defendidos adecuadamente en la fase final de la reforma de la PAC, se presenta la siguiente

MOCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a trasladar al Gobierno de España los siguientes objetivos y criterios que, a su juicio, son esenciales para defender, en la última fase de la reforma, la aplicación en nuestro territorio de la futura Política Agraria Común en el horizonte 2020:

1. Garantizar el mantenimiento sin recortes de los fondos que se han venido percibiendo desde 2007 de forma anual en Castilla y León de las actuales asignaciones de la Política Agraria Común.

2. A la hora de definir agricultor activo como perceptor de ayudas, sea tenido en cuenta que se apoye de forma prioritaria a quien ejerce de forma efectiva la actividad agraria y participa activamente en el desarrollo económico, social y medioambiental del medio rural.

3. Delimitar el número de hectáreas elegibles en España y por agricultor.

4. Diseñar un modelo de convergencia interna limitada y pausa en el tiempo que evite distorsiones sobre determinados sectores y modelos productivos.



5. Formular una mayor flexibilización del Greening respecto a la propuesta de la Comisión.

6. Apoyar el incremento hasta el 15 % para las ayudas asociadas.

7. Prolongar hasta el 2020 el régimen actual de las cuotas en el sector azucarero así como salvaguardar los derechos de plantación de viñedos hasta el 2030.

8. Fortalecer las organizaciones de productores y la coordinación de las autoridades nacionales de competencia, que garanticen un trato igualitario a todos los productores".

Valladolid, 19 de abril de 2013.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Óscar López Águeda



4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

451. Mociones

M/000129-01

Moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a política general en materia de universidades, consecuencia de la Interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria de 16 de abril de 2013.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de abril de 2013, ha admitido a trámite la Moción, M/000129, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a política general en materia de universidades, consecuencia de la Interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria de 16 de abril de 2013.

De conformidad con el artículo 154 del Reglamento podrán presentarse enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dicha Moción haya de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de abril de 2013.

LA SECRETARIA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

LA PRESIDENTA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el ARTÍCULO 154 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente MOCIÓN derivada de la Interpelación I/000129 relativa a "Política general en materia de universidades":

ANTECEDENTES

El debate celebrado como consecuencia de la Interpelación ha permitido valorar la grave situación por la que atraviesan actualmente las Universidades Públicas de la Comunidad Autónoma, tras las decisiones que ha adoptado en los últimos años la Junta de Castilla y León en lo relativo a diferentes aspectos de la política universitaria y a la financiación de los Centros de Investigación.

Así, la gestión política de la Consejería de Educación del llamado mapa de titulaciones ha generado incertidumbres innecesarias a las Universidades Públicas; las previsiones iniciales realizadas por la Junta de Castilla y León respecto a ingresos por tasas académicas de las Universidades Públicas en el curso 2012-2013 no se están cumpliendo; existen



graves problemas para impartir docencia en algunas áreas de conocimiento por la tasa de reposición impuesta por el Gobierno de España y por las trabas de la Junta de Castilla y León a la realización de nuevas contrataciones laborales de PDI; las tasas de matrícula de estudios oficiales son de las más caras de España; y numerosos investigadores han alertado de los riesgos para el futuro de los Centros de Investigación por los recortes realizados en los últimos años.

Ante esta situación, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

MOCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1. Adoptar las decisiones económicas que sean necesarias para compensar a las Universidades Públicas de Castilla y León por la diferencia que se produzca, en su caso, entre las previsiones realizadas por ingreso de tasas académicas durante el curso 2012-2013 y las cantidades efectivamente ingresadas por este concepto.

2. Desistir de la aprobación del decreto anunciado para modificar el mapa de titulaciones universitarias de Castilla y León ante la cercanía del periodo de matrícula para curso académico 2013-2014.

3. Realizar todas las gestiones posibles ante el Gobierno de España para que antes del próximo 30 de junio modifique la normativa en vigor que fija en un 10 % la tasa de reposición del Personal Docente e Investigador funcionario de las Universidades Públicas.

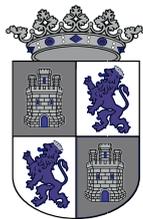
4. Adoptar las decisiones que sean necesarias para permitir la contratación de nuevo personal docente e investigador laboral por parte de las Universidades Públicas.

5. Crear para el curso 2013-2014 una convocatoria de ayudas de matrícula para estudios oficiales de másteres en las Universidades Públicas de Castilla y León.

6. Otorgar en 2013 subvenciones directas a los centros específicos de investigación de Castilla y León, vinculados total o parcialmente a las Universidades Públicas, para sufragar parcialmente sus gastos de funcionamiento".

Valladolid, 18 de abril de 2013.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Óscar López Águeda



4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Propositiones No de Ley

PNL/000750-02

Retirada de la Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando a la Junta de Castilla y León a modificar o impulsar la modificación de la normativa legal y reglamentaria en materia de urbanismo para definir sistemas de gestión urbanística que permitan regularizar las actuaciones urbanísticas irregulares en suelo rústico, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 207, de 25 de marzo de 2013.

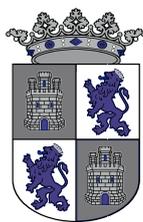
PRESIDENCIA

Con fecha 24 de abril de 2013, el Grupo Parlamentario Socialista retiró la Proposición No de Ley, PNL/000750, instando a la Junta de Castilla y León a modificar o impulsar la modificación de la normativa legal y reglamentaria en materia de urbanismo para definir sistemas de gestión urbanística que permitan regularizar las actuaciones urbanísticas irregulares en suelo rústico, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 207, de 25 de marzo de 2013.

Publíquese en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de abril de 2013.

LA PRESIDENTA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN,
Fdo.: María Josefa García Cirac



4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Propositiones No de Ley

PNL/000771-02

Retirada de la Proposición No de Ley presentada por los Procuradores D.^a María Ángela Marqués Sánchez, D. Javier Campos de la Fuente, D. Miguel Ángel Fernández Cardo, D.^a Ana María da Silva García y D.^a Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez, instando a la Junta de Castilla y León a iniciar un proceso real de diálogo con las familias afectadas por la eliminación del primer ciclo de la educación secundaria obligatoria en el curso 2013-2014 en las localidades de Vega de Espinareda, Toral de los Vados y Riaño (León), y a no tomar ninguna decisión sobre la eliminación de los grupos de primero y segundo de la ESO sin el respaldo de las familias afectadas, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 222, de 19 de abril de 2013.

PRESIDENCIA

Con fecha 22 de abril de 2013, los Procuradores D.^a María Ángela Marqués Sánchez, D. Javier Campos de la Fuente, D. Miguel Ángel Fernández Cardo, D.^a Ana María da Silva García y D.^a Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez retiraron la Proposición No de Ley, PNL/000771, instando a la Junta de Castilla y León a iniciar un proceso real de diálogo con las familias afectadas por la eliminación del primer ciclo de la educación secundaria obligatoria en el curso 2013-2014 en las localidades de Vega de Espinareda, Toral de los Vados y Riaño (León), y a no tomar ninguna decisión sobre la eliminación de los grupos de primero y segundo de la ESO sin el respaldo de las familias afectadas, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 222, de 19 de abril de 2013.
Publíquese en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

LA PRESIDENTA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN,
Fdo.: María Josefa García Cirac



4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Propositiones No de Ley

PNL/000800-01

Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando a la Junta de Castilla y León a ejercer las competencias que estatutariamente se reconocen a la Comunidad en materia de vivienda, derecho de consumidores y usuarios y protección social de las familias, para proteger a los individuos y familias de Castilla y León de la pérdida de sus viviendas como consecuencia de procesos de ejecución hipotecaria, para su tramitación ante el Pleno.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de abril de 2013, ha admitido a trámite la Proposición No de Ley, PNL/000800, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando a la Junta de Castilla y León a ejercer las competencias que estatutariamente se reconocen a la Comunidad en materia de vivienda, derecho de consumidores y usuarios y protección social de las familias, para proteger a los individuos y familias de Castilla y León de la pérdida de sus viviendas como consecuencia de procesos de ejecución hipotecaria.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dicha Proposición No de Ley haya de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de abril de 2013.

LA SECRETARIA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

LA PRESIDENTA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno de la Cámara.

ANTECEDENTES

El procedimiento de urgencia por el que se está tramitando la nueva Ley que regulará las ejecuciones hipotecarias no está siendo tan ágil como debería para dar respuesta a los problemas de muchas familias que en Castilla y León están siendo expulsadas de sus domicilios habituales o tienen pendiente la amenaza de un proceso de lanzamiento.



Mientras el Gobierno de España sigue buscando excusas para no incorporar en la reforma normativa de la ley hipotecaria la dación en pago y procedimientos de renegociación de la deuda realmente eficaces para solucionar este dramático problema, en algunas comunidades autónomas se están adoptando medidas encaminadas a ofrecer respuestas inmediatas y eficaces a las personas y familias en situación de sobreendeudamiento que no pueden hacer frente al pago de las cuotas hipotecarias.

El Gobierno gallego ha promovido un convenio de colaboración con el CGPJ y la FRMP para promover una alerta temprana que permita aportar soluciones de vivienda a quienes pueden verse en la calle como consecuencia de un lanzamiento judicial.

Por otra parte, el Gobierno andaluz ha ido más lejos y el día 11 de abril ha publicado un Decreto-ley que aspira a convertirse en un "plan de choque" para frenar la "sangría social" de los desahucios, por el que se establece la expropiación del uso temporal de las viviendas cerradas que obren en poder de entidades financieras y promotoras y en el que se incluyen sanciones de hasta 9.000 euros a bancos e inmobiliarias que no alquilen las viviendas vacías que tienen en stock.

El gobierno del Partido Popular ha manifestado que no está dispuesto a permitir que cada comunidad autónoma decida cómo resolver el drama de los desahucios, pero a falta de una legislación nacional que resuelva el problema de forma eficaz, cada comunidad autónoma, en desarrollo de sus competencias en materia de vivienda y protección de consumidores y usuarios, está legitimada para estudiar y aplicar fórmulas que, dentro de su capacidad de autogobierno, satisfagan las necesidades de los ciudadanos.

Por estos motivos, en aras a garantizar que el nivel de protección de los ciudadanos de Castilla y León no sea inferior al de los ciudadanos de otras Comunidades autónomas, como sería el caso de Galicia y Andalucía, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

Ejercer hasta el máximo nivel posible las competencias que estatutariamente se reconocen a la comunidad en materia de vivienda, derecho de consumidores y usuarios y protección social de las familias, para proteger a los individuos y familias de Castilla y León frente a la pérdida de su vivienda, consecuencia de procesos de ejecución hipotecaria.

A estudiar y elaborar, con carácter de urgencia, un Decreto-ley que habilite a la Junta de Castilla y León a proceder a la expropiación temporal del uso de las viviendas vacías que obren en poder de entidades financieras, promotoras o entidades de gestión de activos, radicadas en Castilla y León, a cambio de un justiprecio suficiente previsto en la propia norma.

A crear un registro de viviendas deshabitadas en el territorio de la Comunidad, en el que se incluyan aquellas viviendas vacías que obren en poder de entidades financieras, promotoras inmobiliarias o entidades de gestión de inmuebles, con el fin de facilitar viviendas a familias desalojadas y en riesgo de exclusión social.

A negociar un convenio con el Consejo General del Poder Judicial y la Federación Regional de Municipios y Provincias a través del cual se cree un instrumento de



alerta temprana que permita al Servicio Integral de Apoyo a las Familias en Riesgo de Desahucio de la Junta de Castilla y León, coordinar la actuación de las diferentes administraciones de forma más eficaz para la resolución de los problemas de vivienda de las personas y familias de Castilla y León que se vean afectadas por un proceso de ejecución hipotecaria.

A estudiar la posibilidad de incorporar al texto del Decreto-ley el establecimiento de multas a las entidades financieras que tengan viviendas vacías y no las saquen a alquiler, así como a las entidades financieras y promotoras que, siendo propietarias de viviendas vacías, no estén al corriente del pago de las cotas mensuales y derramas establecidas por la comunidad de vecinos a la que pertenezca el inmueble.

A incorporar con carácter de urgencia todas aquellas medidas tendentes a evitar que se produzcan nuevos desalojos de primera vivienda en la Comunidad, como consecuencia de impagos de cuotas hipotecarias derivadas de la situación económica provocada por la actual crisis económica.

Valladolid, 16 de abril de 2013.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Óscar López Águeda



4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Propositiones No de Ley

PNL/000801-01

Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España para exigirle la retirada del anteproyecto de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa así como para abrir un proceso de diálogo en relación con el análisis de las necesidades y los objetivos del sistema educativo español, para su tramitación ante el Pleno.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de abril de 2013, ha admitido a trámite la Proposición No de Ley, PNL/000801, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España para exigirle la retirada del anteproyecto de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa así como para abrir un proceso de diálogo en relación con el análisis de las necesidades y los objetivos del sistema educativo español.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dicha Proposición No de Ley haya de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de abril de 2013.

LA SECRETARIA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

LA PRESIDENTA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno de la Cámara.

ANTECEDENTES

La educación en España ha mejorado extraordinariamente en los últimos años, tal y como atestiguan los estudios de organismos internacionales. Hoy los niveles de escolarización son más altos que nunca en todas las etapas educativas, el porcentaje de abandono escolar prematuro ha disminuido sustancialmente en los últimos años, y somos uno de los países en los que más se ha avanzado en los últimos años respecto a



rendimiento y equidad. El resultado es que hoy disponemos de un sistema educativo con un nivel creciente de calidad, organizado como un servicio público universal, que llega a toda la población en condiciones de igualdad y de calidad.

El último impulso a este avance se produce en 2006, año en el que tras un intenso debate y un diagnóstico riguroso, se aprueba la Ley Orgánica de Educación con un altísimo grado de acuerdo entre comunidad educativa, organizaciones sociales y fuerzas políticas. Esta ley, junto al aumento sostenido en varios años de los presupuestos para educación, han permitido un enorme avance en los objetivos de la estrategia de la UE para el 2020.

Estos logros ahora están en peligro al presentar el Gobierno de Mariano Rajoy un nuevo anteproyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa de carácter extremadamente conservador, regresivo para la educación pública y que supone un cambio profundo en la organización de la educación en España. La realidad es que para su elaboración se ha servido de sus principios ideológicos, renunciando a la elaboración de un diagnóstico riguroso, compartido y coherente de las necesidades y objetivos educativos para los próximos años.

Esta nueva reforma abre un camino tan injusto como ineficaz puesto que asume que segregando pronto a los jóvenes se reduce el fracaso escolar y el abandono temprano de la educación y formación. Sin embargo, las medidas propuestas van claramente encaminadas a excluir cuanto antes del sistema escolar precisamente a quienes más necesitan de la escuela, y a formar a los niños y a los jóvenes expresamente con criterios competitivos.

Es este un Anteproyecto de Ley que se utiliza como elemento arrojadizo entre españoles y busca degradar las lenguas cooficiales, al tiempo que promueve un proceso de re-centralización que obvia la contribución de las CCAA a la mejora de la educación en España.

No se entiende qué razones, fuera de las puramente ideológicas, avalan el fortalecimiento de la enseñanza de la religión católica y permiten eliminar la formación Cívica de la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos.

Además, este anteproyecto de Ley muestra una desconfianza preocupante hacia el docente y pone toda su fe en las reválidas, las evaluaciones finales y los rankings.

En definitiva, es una reforma educativa que supone un menoscabo hacia la escuela pública y que demuestra una profunda desconfianza sobre el papel indispensable y positivo que ha jugado en el desarrollo de los últimos treinta años en España.

En Castilla y León su implantación tendría un impacto muy negativo ya que la ley obvia las peculiaridades del mundo rural y requeriría un importante desembolso económico que en estos momentos de profunda crisis económico financiera no parece lo más oportuno, máxime si tenemos en cuenta que los recortes en Educación ya están poniendo en peligro la equidad del sistema educativo en nuestra Comunidad.

Por todo lo expuesto, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a dirigirse al gobierno de España para exigirle:

1. Retirar el Anteproyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).

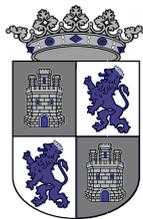


2. Abrir un proceso de diálogo para el análisis de las necesidades y los objetivos del sistema educativo español, mediante la elaboración de un documento abierto de trabajo de objetivos y de diagnóstico.

3. Situar en el centro de este debate a la Comunidad Educativa (AMPAs, representantes de profesores y alumnos), Consejo Escolar del Estado, los Consejos Escolares Autonómicos, expertos educativos, las Comisiones de Educación en el Congreso y en el Senado, los Parlamentos Autonómicos, la FEMP y la Conferencia Sectorial de Educación".

Valladolid, 16 de abril de 2013.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Óscar López Águeda



4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Propositiones No de Ley

PNL/000802-01

Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Sr. González Suárez (IU), instando a la Junta de Castilla y León a la presentación de un proyecto de ley para hacer efectivo el ejercicio del derecho constitucional y estatutario a una vivienda digna y adecuada, para su tramitación ante el Pleno.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de abril de 2013, ha admitido a trámite la Proposición No de Ley, PNL/000802, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Sr. González Suárez (IU), instando a la Junta de Castilla y León a la presentación de un proyecto de ley para hacer efectivo el ejercicio del derecho constitucional y estatutario a una vivienda digna y adecuada.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dicha Proposición No de Ley haya de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de abril de 2013.

LA SECRETARIA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

LA PRESIDENTA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Procurador de Izquierda Unida de Castilla y León, D. José María González Suárez, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno de la Cámara.

ANTECEDENTES

En el mes de abril el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía ha dado un paso muy importante para garantizar que la vivienda no sea un mero "objeto de negocio" sino un "derecho protegido", tal y como se contempla en el artículo 47 de la Constitución española, combatiendo así el concepto de que la vivienda es simplemente una mercancía. De ahí que ese gobierno vaya a fomentar, entre otras cuestiones, el alquiler de viviendas vacías mediante la aprobación de ayudas a los propietarios particulares y la sanción a



bancos e inmobiliarias, utilizando la posibilidad de expropiar por un plazo de tres años, en los casos de familias que vayan a ser desalojadas y en las que concurren circunstancias por las cuales su salida del domicilio suponga una condena a la exclusión social y/o una amenaza para la salud física o psíquica de esas familias.

Las decisiones tomadas por el Gobierno andaluz, mediante el Decreto-ley de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda supone la adopción de unas medidas adecuadas que empiecen a resolver, por una parte, el drama social que se vive con el gran número de desahucios y, por otra parte, supone la aportación de soluciones que faciliten el acceso a la vivienda a la ciudadanía necesitada de ella. Es decir, demuestra que sí es posible tomar decisiones que respondan a las necesidades de los ciudadanos y sí es posible ofrecer alternativas.

PROPOSICIÓN NO DE LEY

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a la presentación urgente de un Proyecto de Ley que, entre otras, contemple e impulse las siguientes medidas:

1. Hacer efectivo el ejercicio del derecho constitucional y estatutario a una vivienda digna y adecuada.

2. Afloración del parque residencial desocupado existente en la comunidad autónoma en manos privadas.

3. Fomento del alquiler de las viviendas vacías existentes en Castilla y León, mediante ayudas a los propietarios particulares y la inclusión de sus viviendas afloradas en una bolsa pública de vivienda.

4. Sanciones a bancos, promotoras privadas e inmobiliarias, que teniendo viviendas vacías, no las pongan a disposición de la bolsa pública de alquiler.

5. Expropiación temporal de viviendas en propiedad de bancos e inmobiliarias, en aquellos casos que vayan a ser desalojados ciudadanos en los que concurren circunstancias sociales tales que, su salida del domicilio, suponga una condena a la exclusión social y/o una amenaza para la salud física o psíquica.

Valladolid, 17 de abril de 2013.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: José María González Suárez



4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Propositiones No de Ley

PNL/000803-01

Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, instando a la Junta de Castilla y León para que, compartiendo el acuerdo alcanzado por la misma con CCOO, UGT, CECALE, las entidades locales y organizaciones del tercer sector, aproveche las herramientas pactadas para prestar la cobertura necesaria a las familias que como consecuencia de la crisis económica se enfrentan a procedimientos de ejecución hipotecaria sobre su vivienda habitual, para su tramitación ante el Pleno.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de abril de 2013, ha admitido a trámite la Proposición No de Ley, PNL/000803, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, instando a la Junta de Castilla y León para que, compartiendo el acuerdo alcanzado por la misma con CCOO, UGT, CECALE, las entidades locales y organizaciones del tercer sector, aproveche las herramientas pactadas para prestar la cobertura necesaria a las familias que como consecuencia de la crisis económica se enfrentan a procedimientos de ejecución hipotecaria sobre su vivienda habitual. De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dicha Proposición No de Ley haya de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de abril de 2013.

LA SECRETARIA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

LA PRESIDENTA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el PLENO.

ANTECEDENTES

Las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales constituyen una de las consecuencias más graves que ha deparado la crisis económica que sufre España desde hace más de cinco años. Esta situación, que enfrenta cada año a un buen número de familias a la pérdida de su hogar, exige la adopción de medidas urgentes por parte de



los poderes públicos, con la finalidad de proteger a aquellos deudores de buena fe que, no pudiendo hacer frente al pago de su hipoteca, se enfrenten a una posible situación de exclusión social.

En este sentido, el Gobierno de España adoptó las primeras medidas con la aprobación del Real Decreto Ley 27/2012 de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, que actualmente se tramita como proyecto de ley en las Cortes Generales con las aportaciones de los diferentes grupos parlamentarios.

Como es obvio, Castilla y León no permanece ajena a esta manifestación de la crisis económica. A pesar de que la incidencia de las ejecuciones hipotecarias sobre primeras viviendas es sensiblemente inferior al de otras regiones españolas con tasas de desempleo muy superiores a la de nuestra comunidad, la Junta de Castilla y León ha sido pionera en la adopción de acuerdos con los agentes económicos y sociales para paliar esta situación.

Así, en noviembre de 2012 se produjo la creación de un Servicio Integral de Apoyo a las Familias en Riesgo de Desahucio, con la colaboración de varias entidades bancarias, el Colegio de Abogados y el de Registradores de la Propiedad, Cáritas, las nueve diputaciones y los 15 ayuntamientos de la Comunidad con más de 20.000 habitantes.

Más recientemente, la Junta de Castilla y León ha alcanzado un acuerdo, en el seno del Consejo de Diálogo Social, para la creación de una Red de protección a las personas y familias en situación de vulnerabilidad como consecuencia de la crisis económica, que coordinará y concentrará esfuerzos de las administraciones, agentes sociales y organizaciones del tercer sector para atender a aquellas familias más perjudicadas por la situación económica.

Por todo lo anteriormente expuesto se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León, compartiendo el acuerdo alcanzado por la Junta de Castilla y León con CCOO, UGT, CECALE, entidades locales y organizaciones del tercer sector, para la creación de una red de protección a las personas y a las familias en situación de vulnerabilidad por la crisis en Castilla y León, así como el acuerdo para la creación del servicio integral de apoyo a las familias en riesgo de desahucio, instan a la Junta de Castilla y León a:

a) Aprovechar las herramientas pactadas en los citados acuerdos para prestar cobertura a las familias que como consecuencia de la crisis económica se enfrentan a procedimientos de ejecución hipotecaria sobre su vivienda habitual.

b) Priorizar las actuaciones negociadas sobre la deuda hipotecaria y las actuaciones de intermediación del Servicio integral de apoyo a las familias en riesgo de desahucio de Castilla y León, procurando así que los beneficiarios de este servicio mantengan la titularidad plena de su vivienda y no vean engrosada su deuda.

c) Proporcionar de forma inmediata tras la aprobación de la Ley de protección de los deudores hipotecarios, el servicio de asesoramiento necesario, a través de las 30 oficinas destinadas al efecto, para que las familias en riesgo de desahucio que se encuentren en situación de especial vulnerabilidad puedan beneficiarse de la suspensión del lanzamiento hipotecario.



d) Promover la adhesión de los distintos ayuntamientos de Castilla y León al "Convenio para el Fondo Social de Viviendas en Alquiler", firmado por los Ministerios de Economía y Competitividad, Sanidad y Servicios Sociales, Fomento, Banco de España, la Federación Española de Municipios y Provincias, la Plataforma del Tercer Sector, las Patronales Bancarias y 33 Entidades de Crédito, para la constitución del Fondo Social de Viviendas.

e) Movilizar todos los recursos autonómicos para la atención a familias en situación de especial vulnerabilidad, coordinando instrumentos como la Renta Garantizada de Ciudadanía, Ayudas de Emergencia Social, Red de distribución de alimentos, Servicio integral de apoyo a las familias en riesgo de desahucio, Programas de atención inicial y acogida a personas y familias en situación de vulnerabilidad, Programa personal de integración y empleo y Programas de orientación y asesoramiento sociolaboral."

Valladolid, 22 de abril de 2013.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Carlos Fernández Carriedo

ESTRUCTURA DEL BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

1. PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS		
110	PL	Proyectos de Ley
120	PPL	Proposiciones de Ley
130	ILP	Iniciativas legislativas populares y de los Ayuntamientos
140	PREA	Reforma del Estatuto de Autonomía
150	PLE	Procedimientos legislativos especiales
160	DLEY	Decretos Leyes
170	DL	Decretos Legislativos
180	REG	Reglamento de las Cortes
181	RES	Resoluciones de la Presidencia
182	EP	Estatuto de Personal
190	OIL	Otras Iniciativas legislativas
2. DECLARACIÓN INSTITUCIONAL, CONVENIOS, ACUERDOS Y COMUNICACIONES		
210	DI	Declaraciones Institucionales
220	C	Convenios
230	ACUER	Acuerdos
240	OTC	Comunicaciones
3. INVESTIDURA Y RESPONSABILIDAD POLÍTICA		
310	SI	Investidura
320	CCF	Cuestión de confianza
330	MC	Moción de censura
390	OC	Otras cuestiones de responsabilidad
4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO		
410	CJCyL	Comunicaciones de la Junta de Castilla y León
420	PROG	Programa y planes remitidos por la Junta de Castilla y León
430	INJ	Informaciones de la Junta de Castilla y León
440	DPG	Debate sobre política general
450	I	Interpelaciones
451	M	Mociones
452	IA	Informaciones de actualidad
461	POC	Preguntas para respuesta oral en Comisión
462	POP	Preguntas para respuesta oral en Pleno
463	PE	Preguntas para respuesta escrita
470	PNL	Proposiciones No de Ley
490	PR	Propuestas de resolución
5. PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A OTRAS INSTITUCIONES Y ÓRGANOS		
510	TC	Tribunal Constitucional
520	CC	Consejo de Cuentas
530	PC	Procurador del Común
590	OIO	Otras Instituciones y Órganos
6. ELECCIONES, DESIGNACIONES, NOMBRAMIENTOS Y PROPUESTAS		
610	ESE	Designación de Senadores
620	ECC	Consejo de Cuentas
630	EPC	Procurador del Común
640	ECS	Consejo Consultivo
690	EOT	Otras designaciones y propuestas de nombramiento
7. COMPOSICIÓN DE LOS ÓRGANOS DE LAS CORTES		
710	MESA	Mesa de las Cortes
720	PTE	Presidencia
730	JP	Junta de Portavoces
740	GP	Grupos Parlamentarios
750	COM	Comisiones
760	PON	Ponencias
770	PLN	Pleno
780	DP	Diputación Permanente
8. ORGANIZACIÓN DE LAS CORTES		
810	ORGAN	Organización y funcionamiento de los servicios
820	OPER	Personal
830	OCON	Contratación
890	OOAC	Otros acuerdos de administración de las Cortes